

Moyo Sam; Yeros Paris. **Ocupaciones de tierras y reforma agraria en Zimbabwe: hacia la revolución democrática nacional.** *En publicación: Recuperando la tierra. El resurgimiento de movimientos rurales en África, Asia y América Latina. Sam Moyo y Paris Yeros [coord.]. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 2008. ISBN 978-987-1183-85-2*

Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/sursur/moyo/08MoYeros.pdf>

Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la Red CLACSO
<http://www.clacso.org.ar/biblioteca>
biblioteca@clacso.edu.ar

SAM MOYO*
PARIS YEROS**

OCUPACIONES DE TIERRAS Y REFORMA AGRARIA EN ZIMBABWE: HACIA LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA NACIONAL

EL MOVIMIENTO DE OCUPACIÓN DE TIERRAS en Zimbabwe ha logrado realizar la primera gran reforma agraria desde el fin de la Guerra Fría¹. Ha sido también el desafío más importante del Estado neocolonial en África bajo el ajuste estructural y, a juzgar por su efectividad a la hora de adquirir tierras, también es el más notable de los movimientos rurales en el mundo actual.

Ha demostrado ser un desafío intelectual y un asunto de ambivalencia política. Por un lado, el proceso de reforma agraria trajo preguntas analíticas fundamentales respecto del capitalismo periférico, el

* Sam Moyo es director ejecutivo del Instituto Africano de Estudios Agrarios, Harare, Zimbabwe. Ha publicado extensamente sobre tierra, temas agrarios y ambientales en Zimbabwe y sur de África. Fue profesor asociado de Estudios Agrarios en la Universidad de Zimbabwe hasta 2000, y también director de varias redes de investigación e institutos en África.

** Paris Yeros ha sido profesor visitante en el Departamento de Economía, Universidad Federal de Paraná, Brazil. Escribió su tesis doctoral sobre la cuestión agraria en Zimbabwe en la London School of Economics. Ha sido editor de las revistas londinenses *Millennium e Historical Materialism*.

1 Agradecemos a Henry Bernstein por los comentarios hechos a un borrador anterior. Los errores de hecho y de interpretación son de nuestra responsabilidad.

Estado y el nacionalismo. Por el otro lado, ni la academia ni las fuerzas políticas “progresistas” se han puesto a la altura de la tarea. La mayor parte de ellas denunció que el proceso de reforma “destruía” al Estado y que su nacionalismo era “autoritario” o que estaba “agotado” (es decir, que pertenecía a una era anterior); pero otros, en cambio, hicieron lo contrario, la celebraron como si fuera la culminación de la “conquista de poder [empowerment] negro” o de la “nativización económica”.

La polarización del debate tiene menos que ver con las peculiaridades de Zimbabwe que con la situación de la academia en la década del noventa, que se ha caracterizado por una desviación con debates enrarecidos sobre la “política de identidad”, nacional e internacional, y el aburguesamiento generalizado de los intelectuales nacionalistas. Ciertamente, hace veinte años, la reforma agraria radical en Zimbabwe habría recibido una respuesta diferente. Mientras ese suceso hubiese presentado dificultades analíticas considerables aun entonces, los intelectuales progresistas habrían debatido los temas relevantes con rigor, y esto concerniría a la naturaleza del Estado neocolonial, el conflicto entre capitalistas, las relaciones campesino-obrero, las lucha de clases dentro del movimiento de ocupaciones de tierras y la dirección de la revolución democrática nacional.

¿Por qué tal cambio en sólo veinte años? ¿Es que el neocolonialismo ya no es relevante? ¿Es que el ajuste estructural dio a luz una democracia nacional? ¿O es que se sustituyó la forma misma de la soberanía nacional por la globalización neoliberal? Nada, por supuesto, podría estar más lejos de la verdad. La respuesta yace precisamente en la cooptación tanto de la academia como de la política de “oposición”, al punto de que el imperialismo quedó mistificado, la determinación nacional degradada, el Estado oscurecido y la cuestión agraria abandonada². Estos giros intelectuales han tenido efectos políticos concretos, que quizá se den más claramente en relación con Zimbabwe, cuyo nacionalismo y reforma agraria radicalizados han resultado ser desagradables para las fuerzas sociales domésticas e internacionales de los nacionalismos “cívicos” y “posnacionalismos”.

LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL NEOCOLONIALISMO

La economía política de Zimbabwe es comparable a la de aquellos otros Estados asiáticos, latinoamericanos y africanos que siguen teniendo un patrón desarticulado de acumulación y cuestiones agrarias sin resolver. Este subdesarrollo persistente es parte esencial de la situación neocolonial, es decir, del fracaso de los Estados jurídicamente independientes

2 Para dos de los ejemplos más rigurosos, ver Hammar, Raftopoulos y Jensen (2003) y Bond y Manyanya (2002).

para completar la revolución democrática nacional. Ésta es la situación, a pesar de las transiciones completas que se han hecho hacia el capitalismo en el siglo XX.

Los casos de Zimbabwe y el de África del sur en general consisten en un subtipo de neocolonialismo que deriva de la experiencia colonizadora blanca. Un aspecto crucial del capitalismo colonizador blanco fue que manifestó periódicamente fuertes contradicciones entre las estrategias introvertidas y extrovertidas de acumulación del capital. Precisamente, tal fue el caso de Zimbabwe, con la emergencia de una burguesía industrial durante el curso de las dos guerras mundiales. En este sentido, la experiencia histórica de Zimbabwe (junto a la de Sudáfrica) puede entenderse como semejante a la de los países latinoamericanos “semiperiféricos”. Un segundo aspecto del capitalismo colonizador blanco, sin embargo, fue que en la organización del proceso de trabajo, el capital blanco ejerció tanto un poder “directo” como uno “indirecto” sobre la población negra nativa. Esto contrasta con las recientes interpretaciones sobre la primacía de la administración “indirecta” en África (Mamdani, 1996) y también con las experiencias históricas de América Latina, donde el sistema *latifundio-minifundio* posterior a la esclavitud no institucionalizó la segregación racial. Estos dos aspectos del capitalismo colonialista blanco le han dado al neocolonialismo en Zimbabwe una forma especial, particularmente en sus dinámicas de clase, raza y nación.

EL ESTADO COLONIALISTA BLANCO

La economía política de Zimbabwe colonial comenzó a exhibir sus tendencias peculiares a principios del siglo XX, cuando la incursión especulativa inicial del capital minero dio lugar al establecimiento de una burguesía agraria blanca con un interés parcial en el mercado doméstico. Los años siguientes se caracterizaron por un creciente conflicto entre capitalistas agrarios blancos, por un lado, y el capital minero y el capital financiero con sede en Londres, por el otro (Arrighi, 1973). Esto culminó con el establecimiento de un “autogobierno” blanco en la colonia de “Rhodesia del Sur” en 1923, mediante el que la burguesía agraria blanca asentaba su liderazgo político y se comprometía con los capitales externos.

La institucionalización de la segregación racial se estableció también bajo el liderazgo del capital agrario blanco. Esto resultaba ser una contradicción en sí misma para cualesquiera fuesen los designios que pudiera haber tenido el capital agrario blanco para el desarrollo de los mercados domésticos. La visión sostenida por el capital agrario blanco del “mercado interno” estaría confinada al elemento colonizador blanco y sólo la desafiaría, parcialmente y a su debido momento, el surgimiento de una burguesía industrial. Tal esquema supremacista blanco

dejaría una marca indeleble en el desarrollo del capitalismo en el Estado colonizador. Desde un período temprano, el capital agrario blanco demostró que a pesar de que era “más que un *comprador* [en español en el original]”, era “menos que nacional” (Phimister, 1988: 180) y, con el tiempo, aunque el conflicto entre capitalistas desafiara las bases de la segregación racial, nunca lo haría hasta el punto de convertirse en propiamente “nacional” –es decir, de producir una alianza entre el capital industrial blanco y las fuerzas populares nacionalistas para el desarrollo concertado del mercado doméstico.

Ya desde los primeros días del Estado colonizador blanco estaban esparcidas las semillas del capitalismo negro. Durante los años de entreguerras, el Estado permitió que naciera una pequeña clase agraria capitalista negra fuera de las áreas comunales –en las “Áreas de Adquisición Nativa”– como una forma de cultivar una alianza burguesa por sobre la división racial. Pero este proyecto fue insignificante, ya que el Estado colonizador se negó a dar apoyo al capital negro para que se expandiera y para que compitiera con el capital agrario blanco. Más allá de los granjeros del Área de Adquisición, dentro de las áreas comunales también se creó una pequeña burguesía negra, en forma paralela a la expansión de la producción de productos básicos, a la que también se habría de excluir del desarrollo dinámico.

El proceso de trabajo en Zimbabwe colonial se caracterizó por una contradicción constante entre la proletarianización y un dualismo funcional gestionado políticamente, a través del cual la producción de pequeñas mercancías en las áreas comunales y, en especial, el trabajo femenino mal pago, subsidiaban la reproducción social de la posición de poder del trabajador masculino en las minas y en los cultivos. Esta contradicción no produciría ni un proletariado industrial estable ni un campesinado viable, sino una fuerza de trabajo en movimiento, de posicionamiento ambiguo y dispersa por las tierras comunales, las granjas blancas, las minas y los lugares de trabajo industrial. Se trataba de un “semiproletariado”, un agregado de trabajadores campesinos domésticos diferenciados por el género y fragmentados por las particularidades etnolingüísticas y un creciente sentido de nacionalidad (Yeros, 2002b). Bajo tales condiciones, la organización de los sindicatos resultaba una lucha onerosa. A los obstáculos inherentes a la semiproletarianización –migración, dualidad rural-urbana, pobreza, diferencias étnicas y de género– se sumaba la represión estatal y, en el período de posguerra, la puesta en marcha de tácticas divisivas por parte del sindicalismo internacional (Raftopoulos, 1996). Sin embargo, poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el sindicalismo logró avances en el Estado colonizador blanco, al punto de movilizar con éxito huelgas a lo largo del país en 1945 y 1947.

El modo de gobernar en Zimbabwe colonial combinaba formas directas e indirectas, pero la forma indirecta estaba lejos de ser autónoma o suficiente para organizar el proceso de trabajo. El proyecto segregacionista del capital agrario blanco prosiguió activamente después de 1923, mediante la forma combinada de la segregación territorial con el Acta de Distribución de la Tierra (1930) y, más crucialmente, con la segregación *legal*. Mientras su sostén institucional consistía en el dualismo funcional de estilo africano, con la transferencia de autoridad judicial a los jefes de las áreas comunales bajo el Acta de Asuntos Nativos (1927) y el Acta de la Ley Nativa y Cortes (1937), su sostén social era la sujeción de las mujeres a la tierra por medio de las relaciones de parentesco, adjudicadas por los jefes. Más allá de esta “administración indirecta”, el capital agrario blanco siguió ejerciendo poder directo sobre los vastos trechos de tierra “europea” que se había apropiado. Allí reprodujeron relaciones de dependencia personal *vis-à-vis* con trabajadores y arrendatarios negros (Palmer, 1977). Por su lado, el capital minero perfeccionaría el “sistema compuesto”, mediante el que se sujetaba el trabajo a los compuestos mineros a través de una variedad de instrumentos económicos y extraeconómicos (Van Onselen, 1976). También se utilizó el poder del Estado central para socavar sistemáticamente la agricultura africana, aplicándole impuestos y manipulándola, especialmente a través de las Actas de Control del Maíz (1931, 1934), con el propósito de subsidiar al capital agrario blanco y de reforzar su hegemonía económica estructural. Entre tanto, el capital agrario y el minero y más tarde el industrial acudieron sistemáticamente al empleo de las fuerzas de seguridad del Estado para suprimir las organizaciones sindicales –especialmente con el Acta de Conciliación Industrial (1937, 1937) y el Acta de Sedición (1936)– como también, en su momento, a las movilizaciones nacionalistas.

La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias provocaron la reestructuración de la economía en dos sentidos muy importantes. En primer lugar, el capital industrial se embarcó en una senda de crecimiento espectacular, quintuplicando sus ganancias entre 1939 y 1948 –en industrias como la textil, de indumentaria y procesamiento de alimentos (Phimister, 2000: 32-33)– y madurando políticamente para presentar un nuevo reto al dualismo funcional. En segundo lugar, el capital agrario volcó su estrategia de acumulación al mercado externo, a través de la conversión de los campos de maíz en plantaciones de tabaco (Arrighi, 1973: 350-358). De allí en más, la competencia entre capitalistas produciría una alianza entre el capital agrario y el minero contra la burguesía industrial.

Entre fines de la década del cuarenta y fines de la década del cincuenta, los capitalistas blancos llegaron a un nuevo compromiso para expandir el mercado interno a través de dos elementos: primero, con el Acta de Labranza de la Tierra Nativa (1951), que tenía la intención de

reorganizar las áreas comunales a lo largo de las líneas capitalistas y crear un proletariado urbano estable; y segundo, ampliando la esfera de influencia del capital blanco más allá de Rhodesia del Sur hasta Malawi colonial y Zambia (Nyasaland y Rhodesia del Norte), por medio de la Federación de África Central. Este proceso se acompañó con reformas limitadas en las relaciones laborales y en el sistema electoral, haciendo esfuerzos por cooptar a los trabajadores negros y a la pequeña burguesía dentro del marco y la ideología de la “asociación” racial.

Las reformas y la asociación no tuvieron éxito ni sobrevivieron. Hacia fines de la década del cincuenta, las constricciones perennes de la acumulación desarticulada se impusieron a la Federación y llevaron a la crisis su balanza de pagos. Para 1958, el equilibrio de clases y las alianzas capitalistas ingresaban en un nuevo período de reconfiguración. Por un lado, la organización sindical negra seguía avanzando, ahora con las resonancias del nacionalismo popular anticolonial que se propagaba por todo el continente. Por otro lado, no llegó a emerger a tiempo una burguesía negra, al resguardo del capital blanco, que defendiera una solución neocolonial. En cambio, el Estado colonizador blanco se polarizó entre un nacionalismo africano que atravesaba las clases sociales y era dirigido por la pequeña burguesía negra, y una supremacía blanco clasista, dirigida por los capitalistas agrarios blancos (Arrighi, 1973). Durante los años siguientes, se suprimió la organización nacionalista y se la mantuvo en la clandestinidad, se abortó la descolonización, se declaró la independencia unilateral (UDI) en 1965 y, finalmente, se pospuso la transición hacia el neocolonialismo. Con el colapso de la Federación en 1963, Zambia y Malawi hicieron su transición neocolonial cada una por su cuenta.

Bajo la UDI, el Estado colonizador blanco pasó del auge al fracaso. Experimentó un rápido desarrollo industrial cuando todos los capitales, incluyendo el capital industrial, se alinearon bajo un Estado capitalista altamente intervencionista para ser conducidos a un proyecto cerrado de supervivencia y supremacía blanco. Ello sería facilitado por las sanciones internacionales patrocinadas por la ONU, que eran permeables en su diseño y permitían, de hecho, que los bancos occidentales financiaran a Rhodesia la importación de petróleo, la ayuda militar y la inversión directa del capital transnacional. Este último expandiendo su provisión de capitales en un 37% entre 1966 y 1976 (Clarke, 1980). Hasta 1974, las “sanciones” y la dirigencia estatal darían como saldo un promedio de crecimiento industrial anual del 9%. Sin embargo, hacia mediados de la década del setenta, la economía colonizadora blanca se recalentaba una vez más, en la medida en que sus constricciones internas y externas se volvían a imponer al proceso de acumulación. Ello se debió a que el Estado nunca hubo expandido el mercado interno

más allá del elemento colonizador –incluso en su introversión– y sí, en cambio, había reforzado el dualismo funcional en su forma segregacionista y continuado dependiendo de la superexplotación de la mano de obra negra para la rápida acumulación de capital. La crisis se agravó política y económicamente por la reorganización del movimiento nacionalista en dos partidos, ZANU (Zimbabwe African National Union) y ZAPU (Zimbabwe African People's Union), con el apoyo de China y de la Unión Soviética, respectivamente, y con la llegada de la lucha armada a las zonas rurales,

Los restantes años de ocupación colonial estuvieron marcados por la guerra de guerrillas en el contexto de la Guerra Fría. Hacia fines de la década del setenta, la política exterior británica y la estadounidense empezaron a estar muy preocupadas por la posibilidad de brotes radicales en el sur de África, razón por la cual centraron sus energías en lograr una transición negociada hacia el neocolonialismo. En 1979, después de años de guerras de guerrillas y con la coalición del Frente Patriótico (PF), el movimiento de liberación firmó la transición neocolonial en Lancaster House, en Londres.

DE LA LIBERACIÓN A LA LIBERALIZACIÓN

La independencia de Zimbabwe se celebró el 18 de abril de 1980. Por fin, el país se embarcaba en un proyecto propio de construcción nacional. Pero en el nuevo Estado, la revolución democrática nacional seguía siendo un asunto de lucha social. El “Estado poscolonial blanco” era una variedad particular del Estado neocolonial, ya que el poder formal no se había entregado solamente a una pequeña burguesía negra, sino que ésta debía compartir el poder con el capital blanco establecido (Mandaza, 1986a, 1986b). Ideológicamente, esta concesión política se lanzó bajo la forma de la “reconciliación”, un eco de la “asociación” de posguerra, y consistía efectivamente en una reconciliación pero *no* “entre las razas” sino “con el capital” (Sibanda, 1988). En el ámbito económico, los intereses industriales y mineros siguieron siendo totalmente propiedad del capital local blanco y del extranjero, bajo condiciones monopólicas. Por su parte, la burguesía agraria blanca, unos 6 mil granjeros en el momento de la independencia, tenían el 39% de la tierra, un monto de 15,5 millones de hectáreas de tierras agro-ecológicas de primera, mientras que 1 millón de familias negras estaba confinado al 41,4% de la tierra, o a 16,4 millones de hectáreas marginales (Moyo, 1995). En suma, mientras la minoría blanca, menos del 3% de la población, dominaba cerca de dos tercios del ingreso nacional, la mayoría negra, el 97%, tomaba el tercio restante. En términos constitucionales, el acuerdo de Lancaster House establecía el principio de “comprador dispuesto, vendedor dispuesto” como base de las transferencias de tierras, con fecha de expiración en el

año 1990, y reservaba el 20% de las bancas parlamentarias para el 3% de la comunidad blanca hasta el año 1987.

En ese momento Zimbabwe era, después de Sudáfrica, la segunda economía más industrializada del África subsahariana. Zimbabwe heredó el complejo agro-industrial del UDI, caracterizado por una articulación significativa entre los sectores (casi la mitad de la producción agrícola alimentaba a la industria doméstica) y diversificó la producción de 7 mil productos que comprendían ropa, alimentos, fertilizantes, químicos, productos de metal, maquinaria eléctrica, equipamiento e, incluso, automóviles montados localmente. Esta actividad manufacturera representaba en términos contables el 25% de su PBI y el 40% del intercambio con el extranjero (Mlambo, 2000: 80). A pesar de ello, la economía continuó teniendo un patrón desarticulado de acumulación y el mercado interno siguió siendo de lujo, efectivamente limitado a menos del 15% de las 7 millones de personas de Zimbabwe. La agricultura permaneció como el sector más importante, al emplear al 70% de la población y contabilizar el 40% del PBI (Stoneman y Cliffe, 1987: 43).

La construcción nacional se proyectó correctamente como una cuestión de generar una economía endogámica. Es decir, de profundizar la articulación social y sectorial. Sin embargo, bajo el nuevo reparto político, facilitado por la continua debilidad organizativa del semiproletariado (a la que pronto volveremos), el plan nacional invocó el lenguaje reformista de la década del setenta de la ONU, denominado, en el caso de Zimbabwe, “Crecimiento con Equidad”, mediante el que la redistribución estaría subordinada al crecimiento/estancamiento de la industria. A su vez, esta última se vería como el sector de desarrollo líder y no como un auxiliar del desenvolvimiento técnico de la agricultura.

El conflicto intercapitalista en el Estado neocolonial comenzó a manifestar nuevas tendencias y alianzas. La contienda tradicional entre capitales internos y externos se componía ahora de nuevas fuentes de disputa, a saber, entre la ascendente burguesía negra y el capital blanco, pero también en el *interior* mismo de la pequeña burguesía negra. El conflicto racial produciría un escenario particular, marcado por el resentimiento profundo y la manipulación de la raza tanto por parte de los blancos como de los negros (éstos para conseguir concesiones y aquéllos para “disfrazar” el capitalismo monopólico con gerentes negros). Mientras tanto, los conflictos entre negros de la pequeña burguesía se intensificaron con rapidez y trágicamente. La pequeña burguesía negra, en efecto dejada fuera del sector privado blanco, redirigiría sus estrategias de acumulación a través del Estado y recurriría a la manipulación étnica. Esto derivó en violentas y enérgicas medidas del Estado en las provincias sureñas de Matabeleland, durante el período 1983-1987, al oponerse el partido gobernante ZANU-PF a las anteriores guerrillas

disidentes del PF-ZAPU. Como se observó astutamente en su momento, bajo el neocolonialismo “no se utiliza la diversidad étnica para enriquecer la herencia cultural de la nación, sino que se la emplea para avanzar en los intereses de clase de los grupos y de los segmentos. No se usan las divisiones raciales para establecer firmemente la unidad nacional, sino que se lo hace para consolidar la dominación de clases y la explotación” (Sibanda, 1988: 266-267).

No obstante, una preocupación más inmediata para la potencia imperial era el conflicto convencional entre las estrategias de acumulación introvertida y extrovertida. Esta preocupación estaba en sintonía con la generalizada falta de confianza hacia los gobiernos de las mayorías negras y, en particular, del partido gobernante, que continuaba profesando el marxismo-leninismo a pesar de su programa de “Crecimiento y Equidad”. En este sentido, las disposiciones constitucionales de Lancaster House no bastarían para sofocar los temores anglo-estadounidenses hacia el nacionalismo africano. La tarea imperiosa de allí en más sería que el capital exterior prevaleciera en la política nacional y esto significaba centrar las energías políticas y las finanzas en la cooptación del capital industrial, como quedó representado en el Congreso de la Industria de Zimbabwe (CZI). Los otros sectores, el minero, comercial y el agrícola, estaban inclinándose de nuevo hacia una alianza externa con el capital transnacional, dado que el Estado guardián de supremacía blanca había sido derrotado.

La campaña imperialista fue liderada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI): el primero poniendo el acento específicamente en la industria al establecer un “fondo giratorio de exportaciones” para el sector en 1985, y el último enfocándose en conseguir influencia sobre el gobierno a través de la deuda. Ya independiente, a Zimbabwe se la veía como “subdeudada”, con un porcentaje de servicio de deuda de sólo el 10 %, lo que pronto cambiaría. Zimbabwe volvió a tener una nueva crisis de la balanza de pagos en 1982, y esto fue rápidamente aprovechado (Chimombe, 1986, Stoneman, 1989; Bond, 1998). “Luego de un año de haberse unido [al FMI] desde una posición de ‘subdeudadamiento’, Zimbabwe tenía un acuerdo de emergencia y estaba, por lo tanto, en posición de que se le dictaran sus políticas económicas” (Stoneman, 1989: 41). En poco tiempo, el porcentaje del servicio de deuda ascendió rápidamente al 32%. Pero este no era aún el momento de lanzar el ajuste estructural sino sólo de posponerlo, ya que el gobierno optó por una austeridad “autoimpuesta”, bajo la forma de recortes al desarrollo rural que abarcaba las adquisiciones de tierra y los reasentamientos.

En la década del ochenta se hizo una limitada reforma agraria bajo el mecanismo del mercado. En total, el gobierno restituyó 58 mil hectáreas de un total de 3 millones, reduciendo el sector de la agricultura

comercial blanca a unos 11 millones de hectáreas, el 29% de la tierra agrícola. Como veremos, esto fue mucho menor que el objetivo buscado, que era el reasentamiento de 162 mil familias cuando, además, la tierra adquirida era de muy bajo valor agro-ecológico (Moyo, 1995). Bajo el marco constitucional de Lancaster House se hizo más énfasis en el desarrollo rural del sector campesino –investigación, extensión de servicios, carreteras y almacenamiento para la comercialización– y hubo un aumento anual del presupuesto del 37% entre 1980 y 1985, además de un fuerte gasto en educación y en salud (Bratton, 1987). Esto se complementaría con los precios en alza, en el mismo período, de los principales productos básicos (maíz, trigo y carne de vaca), a tal punto que para 1985 los campesinos contaban con el 45% de la producción comercializada (8% en 1980), aunque se diferenciaban en términos de clase y de región agro-ecológica (Cliffe, 1988). Pero en la segunda mitad de la década, el gasto rural entraría en el proceso inverso, con austeridad económica y el estancamiento industrial. Al mismo tiempo, la división del trabajo en la agricultura se modificó, los campesinos se especializaron en el algodón y en el maíz y los granjeros a gran escala en el café y el en tabaco –los grandes ganadores de divisas en el intercambio con el extranjero– y también en el maíz y el algodón. Un resultado político importante fue que los granjeros a gran escala se volcaron una vez más hacia el exterior y se interesaron por dismantelar –liberalizar– los sistemas de control de precios que utilizaba el Estado para transferir ingresos al sector campesino a través del desarrollo de infraestructura (Skålnes, 1995).

La industria había superado los límites de su capacidad y para fines de los ochenta había sido cooptada por los mercados de exportación. Para 1988, todo los capitales de todos los sectores se habían realineado en una instancia de política común volcada hacia el exterior, específicamente en el programa de liberalización promovido por el Banco Mundial. Es importante señalar que este realineamiento coincidió con el aburguesamiento de la elite negra, cuyas estrategias de acumulación se desarrollaban todavía en los bordes del capitalismo monopólico –en el pequeño comercio, en bienes raíces y en la industria de la hospitalidad– y con la asistencia del Estado, en un proceso conocido como “corrupción”. Fue también en una etapa avanzada de la “compra sistemática” [*compradorization* en el original] que un pequeño pero poderoso grupo se consolidó dentro del mismo circuito financiero dominado por los blancos (Bond, 1998). Después de 1987, con el fin de la violencia en Matabeleland gracias al Acuerdo de Unidad y, consecuentemente, con la absorción del PF-ZAPU dentro de las líneas del ZANU-PF, las elites nacionalistas dejarían finalmente de lado sus diferencias étnicas y allanarían el camino para una estrategia de acumulación conjunta (Raftopoulos, 1992). Al año siguiente, la discusión empezó con la fundación del Centro de Negocios y de Desarrollo Nativo (IBDC), un

grupo de presión formado por negros que buscaba conseguir mejores tratos con el capital blanco (CZI), y que pronto trasladaría su capacidad de presionar a la “acción afirmativa” en el curso de la liberalización. Todo el proceso de aburguesamiento, de “compra sistemática” [*compradorization*] y de unificación nacional fue acompañado por un nuevo proyecto político para establecer, por una enmienda constitucional, un “Estado de partido único”. Es decir, una dictadura de la burguesía despojada de sus formalidades democráticas. Como veremos, ésta sería derrotada por las movilizaciones populares lideradas por el Congreso de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU).

Si en el resto de la periferia se imponía un ajuste estructural por medio de la crisis de la balanza de pagos (Gowan, 1998; Haggard y Maxfield, 1996), en Zimbabwe se produjo a partir de la cooptación de sus capitales domésticos. Aunque Zimbabwe estaba llevando a cabo políticas de austeridad y funcionaba con una sobrecapacidad industrial, aún no se hallaba en crisis de pagos (Bond, 1998). La transformación del panorama mundial ayudó a cambiar la dirección económica, específicamente con el colapso de la Unión Soviética, en cuyo interior se produjo una crisis de legitimidad de la política económica estatal. Los eventos se sucedieron con velocidad: en 1989 se implementó un Código de Inversión liberal; en 1990 el sistema de asignaciones de intercambio con el exterior fue reemplazado por una Licencia General Abierta de Importaciones y, finalmente, en 1990 se lanzó el Programa de Ajuste Estructural Económico. Esto implicaba una receta estandarizada de recortes en el gasto público, la devaluación de la moneda y la liberalización de los precios, de las tasas de interés y del comercio, seguido de la desregulación de las cuentas de capital y de las relaciones laborales.

Durante los años siguientes, el programa de liberalización se implementó de lleno y provocó los efectos estanflacionarios [*stagflationary*] estándares. Para 1992, el déficit comercial había aumentado rápidamente, la inflación se había triplicado al 42% y las autoridades monetarias instrumentaban el “sadomonetarismo” (Bond, 1998). Los resultados económicos fueron los siguientes. Entre 1991 y 1995 comenzó la desindustrialización, con una nueva ronda de bancarrotas y de reducciones, que supuso el cierre de la quinta parte del sector de indumentaria. Se redujo la utilización de la capacidad industrial al 65%, mientras que para 1998, la contribución de la industria manufacturera al PBI había caído un cuarto por debajo, al 17% (ZCTU 1996; UNDP/UNCTAD, 2000). Hacia 1993, los salarios reales habían caído unos dos tercios; hacia 1995, la pérdida de trabajos, tanto en los sectores privados como públicos, sumaba unos 45 mil; mientras tanto, el porcentaje de los salarios en los ingresos nacionales había caído del 64 al 40%, al revés del crecimiento de las ganancias, que ascendió del 37% al 60% (ZCTU, 1996; Kanyenze, 1996).

La política agrícola sufrió reveses similares. Las juntas de mercadeo se comercializaban o privatizaban y los servicios de extensión, subsidios y créditos fueron reducidos, todo lo cual produjo una sinergia negativa con devaluación de moneda, a los efectos de elevar los costos de producción de los productores de pequeñas mercancías y erosionar los ingresos del agro (ZCTU, 1996; UNDP/UNCTAD, 2000). El foco de la política agrícola de la ESAP estaba puesto en la promoción de las exportaciones tradicionales (tabaco, algodón, carne, etc.) y en las actividades de exportación no tradicionales (en particular en la crianza de avestruces, horticultura y gestión de la fauna salvaje), esto último vendido en términos de la “ventaja comparativa” de Zimbabwe y confeccionado a medida exclusiva de las granjas a gran escala que, rápidamente, expandieron sus operaciones a las nuevas actividades. Promediando la década, casi un tercio de las granjas comerciales había adoptado la horticultura y el ecoturismo y, en menor medida, la crianza de avestruces, mientras que sólo el 10% de los pequeños campesinos se había involucrado en estos usos no tradicionales de la tierra (Moyo, 2000).

Finalmente, la política agraria ingresó en un período de ambigüedad y de nuevas contradicciones. Por un lado, las salvaguardas constitucionales de Lancaster House para las transferencias de tierras basadas en el mercado expiraron en 1990; por el otro, el movimiento de liberación fue cooptado, por ese entonces, por el ajuste estructural, un esquema de política macroeconómica que desplazaría la agenda de reforma de la tierra. El resultado contradictorio fue una serie de enmiendas constitucionales (1990, 1993) y la elaboración de una nueva Acta de Adquisición de Tierras (1992) que, de allí en más, habilitarían al Estado para designar y adquirir tierras compulsivamente. Sin embargo, dicha legislación retenía los principios del recurso legal para los terratenientes y la compensación e, incluso, no renunciaba al método de “comprador dispuesto, vendedor dispuesto”. Durante los años siguientes, ambos métodos (Estado y mercado) coexistirían constitucionalmente y la estructura constitucional para la adquisición compulsiva permanecería, en efecto, inactiva. Entre 1992 y 1997 se adquirieron, aproximadamente, 800 mil hectáreas, la mayoría de las cuales se encuentra en las regiones menos fértiles (Moyo, 1995; GoZ, 1999).

El ajuste estructural tuvo un efecto económico y político devastador para Zimbabwe. El segundo país más industrializado de África entró en una desindustrialización acelerada y, al mismo tiempo, empezaban a retroceder los logros sociales alcanzados en el campo de la salud y de la educación durante el período postindependentista (UNDP/PRF/AIDS, 1998). El peso del ajuste lo cargaron la casa del campesino-trabajador y, especialmente, las mujeres, cuyo trabajo productivo y reproductivo se vio, por necesidad, intensificado. Para empeorar las cosas, al ESAP se

sumó la pandemia del SIDA. Así, al deterioro de la capacidad física se asociaron la depresión del empleo, la erosión del salario real y la disminución de los ingresos del campo (todo lo cual ejercería una presión sobre el campesinado semiproletarizado que lo lanzaba a actividades económicas marginales, a la ilegalidad y al conflicto social). Políticamente, el sentido de la liberación nacional y el de la cuestión agraria en particular se transformarían, con el capital negro en alza, en un proyecto de “nativización”, en efecto, una “fórmula de sustitución racial para el desarrollo de la agricultura capitalista” (Moyo, 1995: 7). En la década del noventa, el IBCD y otros grupos de presión pedirían que el gobierno “reservara” tierras para la “nativización”, pero obtuvieron muy pocos resultados, ya que la economía se encontraba en una espiral descendente. Por ese entonces, el capital agrario negro sumaba sólo trescientos cincuenta granjeros que habían comprado tierra y cuatrocientos granjeros que arrendaban 400 mil hectáreas de tierra (Moyo, 2001b). En lo sucesivo, el conflicto intercapitalista no sería una disputa del tipo introversión/extroversión, sino que sería mucho más claramente racial. Y aunque el nacionalismo estaría animado por contradicciones de clase más pronunciadas, también surgiría la posibilidad de una alianza de clases transversal nacionalista por la tierra.

CIVILIZANDO A LA SOCIEDAD

El conflicto entre capitalistas es una de las fuerzas naturales de empuje de la sociedad capitalista; la otra es la lucha de clases. Interpretar esta última es un desafío de otro orden, dadas sus diferentes manifestaciones, desde sus formas “encubiertas” hasta las más visibles y organizadas, sus divisiones de género, de edad y de etnia. El reto es más grande cuando se trata de sociedades semiproletarizadas, donde el proceso de trabajo contiene formas capitalistas y formas ostensiblemente no capitalistas de trabajo y donde la política se divide entre el campo y la ciudad. Y un desafío aun mayor es entender la clase dentro del contexto más amplio del imperialismo y de su antítesis nacional, es decir, asociar la lucha de clases al principio de autodeterminación nacional. En África, históricamente, los análisis de clase y de nación han sido de los más profundos (Fanon, 2001; Cabral, 1979), pero con los años han sido reemplazados por aquellos otros que o ven al nacionalismo sin criticarlo o no lo ven en absoluto. En la independencia de Zimbabwe, el estudio del nacionalismo tomó un nuevo rumbo de compromiso crítico, especialmente entre los intelectuales zimbabwenses. Esto produjo un fuerte debate, cuyo enfoque se centraba en las elites políticas (Mandaza, 1986b), la política de la clase obrera urbana organizada (Raftopoulos, 1992, 1999, Raftopoulos y Yoshikuni, 1999) y la política de la clase obrera rural de bajo perfil (Moyo, 1995, 1999, 2000, 2001a).

En la década del noventa, el estudio del nacionalismo se amoldó a la liberalización y a la nueva preocupación por la “sociedad civil”. Un hito en el debate africano fue la publicación de *Ciudadano y sujeto* (1996) de Mahmood Mamdani, que volvió a traer con éxito la cuestión agraria al debate de la sociedad civil. Aunque fue muy importante para abrir el camino, no contenía un análisis económico-político acabado: reducía la cuestión agraria (clásicamente entendida como una transición hacia el Estado moderno) a un mero asunto de gobierno local, y confinaba la cuestión nacional (la consecución de la autodeterminación frente al imperialismo) al dominio de las relaciones campesinado-Estado. Como consecuencia, una serie de temas importantes o se dejó de lado, incluyendo la organización del proceso de trabajo como un todo (la cuestión laboral) y el conflicto entre capitalistas (ya sea interno/externo o racial), o quedó oscurecida por el hecho de no ubicar el Estado y la sociedad civil en su contexto *neocolonial* específico. Nuestro análisis del caso de Zimbabwe sirve como contrapunto.

Es bien sabido que la lucha de liberación en Zimbabwe fue un levantamiento popular de masas con implicaciones internacionales de largo alcance. Sin embargo, también se sabe que nunca alcanzó un buen entendimiento clasista por sí mismo ni logró articular un proyecto socialista (Mandaza, 1986a). El liderazgo de su pequeña burguesía, que actuaba como el punto de apoyo entre el imperialismo y el semiproletariado, nunca se inclinó decisivamente a favor de este último, que siguió siendo dependiente en su ideología y en su organización: el sindicalismo en las áreas urbanas se fragmentó crónicamente y quedó subsumido, durante la guerra, bajo los partidos nacionalistas en competencia, en tanto que fueron los propios partidos los que asumieron directamente la movilización rural. A su vez, la base social primaria de la lucha de liberación, constituida básicamente por trabajadores-campesinos pero también por la pequeña burguesía rural, se alojó en las zonas rurales, donde se libraba la guerra. Su estructura ideológica era anticolonial y ponía un fuerte énfasis en la tierra y en su recuperación. Esta estructura ideológica y la base rural del nacionalismo zimbabwense continuarían ejerciendo poder de opinión sobre el destino de la liberación nacional, en especial, en el curso de su aburguesamiento.

Después de la independencia, una ola de huelgas sin autorización sindical en las zonas urbanas (doscientas huelgas en 1980 solamente) y de ocupaciones generalizadas de tierras en las zonas rurales asolaron Zimbabwe, en lo que fue descrito como una “crisis de expectativas” (Sachikonye, 1986; Wood, 1988). Éstas se agravaron, como vimos, por una división de la elite en Matabeleland. En el suceso, la civilización de la sociedad adaptada a los requerimientos del neocolonialismo fue rápida, ya que el partido gobernante se dispuso a “colocar un reino sobre

una base de masas” (Mandaza, 1986b). Las tácticas a emplear consistían, primero, en dividir al semiproletariado organizado entre el campo y la ciudad; segundo, en hacer corporativa la expresión política a través de los canales administrativos del partido; y tercero, en usar el aparato estatal de Rhodesia para suprimir la disidencia, de forma más violenta en Matabeleland. Sin embargo, el neocolonialismo también exhibía su “esquizofrenia” en la entrega de un número de bienes sociales, especialmente para el desarrollo rural, y en la inclusión de la reforma agraria. De hecho, el neocolonialismo nunca se quedaría tranquilo frente a las masas semiproletarias, cuyas tácticas de ocupación de tierras, fuera de la sociedad civil, obligarían al gobierno a implementar desde temprano un “programa acelerado de reasentamiento” que involucraba las tierras abandonadas por los granjeros blancos durante la guerra.

A menudo se afirma que la sociedad civil de Zimbabwe estaba subordinada al “Estado”. Pero esto es caer en la trampa liberal de dicotomizar al Estado y a la sociedad civil. En primer lugar, el Estado es la expresión institucional de la relación *capital-trabajo* (Marx, 1975): no sólo porque es inseparable de la sociedad sino porque, además, tiene el rol activo de “civilizarla” para cumplir con los requerimientos del capital. En segundo lugar, el Estado es la expresión institucional *local* de la sociedad capitalista, dentro de una sociedad capitalista más amplia que trasciende al Estado y que actúa a través de un sistema-de-estados (ver Moyo y Yeros, pág. 19 de este volumen). De aquí se siguen tres implicaciones: (a) mientras el orden mundial resultante es formalmente “anárquico”, “multilateral” y se funda en el principio de la soberanía nacional, en sustancia sigue siendo imperialista al violar la soberanía nacional; (b) los orígenes de la “civilización” del capital son el “Estado”, el “supraEstado” y el “transEstado”, para incluir finanzas *inter alia* internacionales, operaciones militares encubiertas y abiertas, agencias donantes y sindicalismo internacional; y (c), como punto crucial, romper con el Estado no es una condición suficiente para lograr una expresión autónoma propia, lo que se requiere es romper con la civilidad del *capital*, y ésta es una tarea mucho más demandante. En el caso de Zimbabwe, dicha “incivilidad” ha estado presente durante todo el período de postindependencia pero, en general, ha sido fragmentada, de bajo perfil, débilmente organizada y desarticulada. Cómo esta “sociedad incivil” consiguió una reforma agraria radical *a través del Estado y contra el imperialismo* es una cuestión que desafía la sabiduría predominante.

El Estado neocolonial dirigió la civilización de la sociedad en Zimbabwe, siempre con tensiones y contradicciones, asistido por agencias internacionales. Respecto de las relaciones laborales, el Estado procedió a corporizar al sindicalismo, al separar institucionalmente a los trabajadores del sector público y a los del privado bajo la PSA

(Asociación de Servicios Públicos) y el ZCTU, respectivamente, imponiendo un liderazgo clientelar e interviniendo en las determinaciones salariales. La inauguración en 1981 del ZCTU fue patrocinada por el International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) y la estadounidense AALC (el organismo regional del AFL-CIO), en un mensaje claramente destinado al capital internacional. El salario real permaneció virtualmente sin cambios durante los cinco años siguientes, mientras que los sectores domésticos y de la agricultura continuaban por debajo de la línea de pobreza (Wood, 1988). A lo largo de estos años, el ZCTU se mantuvo bajo el ala del Estado, a la vez que recibía fondos tanto del ICFTU como del World Federation of Trade Unions (WFTU), comandada por los soviéticos.

Pero a mediados de la década del ochenta, el centro nacional de los trabajadores comenzaría a independizarse del Estado y se embarcaría en un camino de coalición con el capital. Entre 1984 y 1988, el centro depuró la corrupción de sus filas, eligió una dirección independiente, implementó un reclutamiento interno, democratizó la campaña y entró en una nueva era de relaciones de trabajo con el adversario. Esto último incluía no sólo pedidos concertados para la negociación colectiva sino también la movilización nacional contra el Estado de “partido único” y, ulteriormente, contra el ajuste estructural. Pero los defectos del centro de trabajo también eran claros: todavía faltaba crear lazos fuertes con los obreros de planta, seguía siendo financieramente débil y dependiente y estaba reducido a los trabajadores formalmente empleados mayormente en áreas urbanas; el centro de trabajo no tenía relaciones organizacionales con las áreas rurales, excepto con las granjas comerciales, en las que los trabajadores estaban muy débilmente organizados y en condiciones de semiservidumbre.

Estos puntos débiles fueron su talón de Aquiles y provocaron su “recivilización”. Mientras durante la primera mitad de los noventa condujo una campaña provocadora contra la liberalización, promediando la década se empezó a ver que moderaba su postura, tecnificando su lenguaje de desarrollo y llamando a un “diálogo social”. Tal transformación se debió a la combinación de la represión estatal a la cual estaba sujeta, y a la adopción en masa por parte del ICFTU y de otras agencias donantes del centro de trabajo en los albores del colapso soviético. Hacia fines de la década del noventa, dos tercios del ZCTU dependían del ingreso de esas fuentes extranjeras. Por ese entonces, también había abandonado la tarea de establecer relaciones organizativas con los desempleados y con las áreas comunales y, en cambio, provocaba al partido gobernante con el fundamento de la “buena gobernabilidad”, el discurso imperialista de fines del siglo XX. Ésta se convertiría, asimismo, en la estructura ideológica del nuevo partido que crearía el ZCTU –el Movimiento para el Cambio Democrático (MDC)–, para oponerse al ZANU-PF en las elecciones del nuevo milenio (Yeros, 2002a, 2002b).

En las áreas rurales, el proceso de civilización no fue menos tenso o contradictorio. Por un lado, el partido gobernante intentó realizar reformas agrarias “aceleradas”, presionado por las ocupaciones masivas, puesto que “la redistribución de la tierra era una demanda clave para el distrito electoral más populoso del gobierno y, al menos en principio, la gente tenía acceso a protectores poderosos y al espacio para actuar por fuera de las estructuras estatales” (Alexander, 1993: 185). El gobierno estableció estructuras políticas modernas para reemplazar a los jefes tribales, bajo la forma de comités de desarrollo –provinciales, regionales, barriales y aldeanos– y amalgamó las áreas africanas y europeas anteriormente segregadas en Consejos Regionales Rurales (RDC). Por otro lado, el gobierno pronto volvería a *resubordinar* al gobierno local bajo un gobierno central y los requerimientos del neocolonialismo. “En teoría, el gobierno había establecido canales seculares, no racistas y democráticos para la participación popular en la formulación de políticas y de planificación desde el nivel aldeano al nivel provincial”; en la práctica, estas estructuras eran marginales y estaban consideradas por el gobierno central “primordialmente como agencias de ejecución, no de formulación, de políticas”; hasta la jefatura tribal resucitó, para retomar el control de las cortes y así reforzar el orden patriarcal (Alexander, 1993: 168-173). Además de sobre el gobierno local, el partido gobernante tuvo éxito en corporativizar los intereses agrícolas, con excepción del Sindicato de Granjeros Comerciales blanco (CFU). Aquí, la estrategia sería fusionar a todos los granjeros en un gremio para diluir las divisiones raciales y de clase; el resultado fue que en 1991 sólo se agruparon los granjeros comerciales negros a pequeña escala y los granjeros de las áreas comunales en la Unión de Granjeros de Zimbabwe (ZFU), bajo el control de los intereses burgueses de la agricultura, mientras que el CFU siguió siendo independiente (Bratton, 1994).

Hacia la década del noventa, las organizaciones urbanas y rurales, estuvieran o no bajo la influencia del Estado, se habían civilizado ante los requerimientos del capitalismo neocolonial, lo cual también daría lugar a un vacío político compuesto por el declive económico inducido por la ESAP. Hacia fines de esa década, ninguna organización cívica tenía un proyecto de clases que unificara al semiproletariado, como tampoco lazos organizativos con el campo por fuera de la agricultura comercial, o independencia financiera (ni siquiera la formalmente democrática ZCTU). Cualquiera fuera el tipo de defensoría que existía entre las organizaciones cívicas para la cuestión de la tierra, era ambigua y retórica, y se sumergía en el discurso liberal de la “buena gobernabilidad” y de los “derechos humanos”. Cerca de 1999, el conjunto de las sociedades civiles de Zimbabwe –las organizaciones cívicas ampliamente urbanas y/o de la burguesía/pequeña burguesía, que integraban a trabajadores, iglesias y ONG– se unificaron

en una “Convención Nacional Popular de Trabajadores” para discutir y, finalmente, fundar un nuevo partido político, el MDC.

Sin embargo, el semiproletariado nunca abandonó la causa de la tierra. A lo largo del período de independencia, los sin tierra y los que tenían poca tierra continuaron con las ocupaciones (Moyo, 2000, Yeros, 2002b). A pesar de que generalmente eran difusas y pasaban inadvertidas representaban, en suma, una grave amenaza para la legitimidad del partido gobernante. Como señalaba un memorando interno del Ministerio de la Administración Local, en una fecha tan temprana como 1988:

No es necesario enfatizar que, teniendo en cuenta la secular Cuestión de la Tierra, se observa que la severidad y la centralidad del problema de las usurpaciones tienen su propia inercia. Es decir, las usurpaciones se convirtieron en una prioridad de fuerza en la agenda, antes de nuestro liderazgo nacional. En la actualidad, hay alrededor de cien núcleos de usurpaciones de proporciones suficientes como para llamar urgentemente la atención, y estos núcleos constan de miles de personas que ya han probado el sabor de la batalla con las autoridades.

Las ocupaciones de tierras se intensificarían en la década del ajuste estructural. Y cualquier acción sobre la tierra que se tomara de allí en más se haría por fuera de la red cívica.

OCUPACIONES DE TIERRA Y REFORMA AGRARIA

Las ocupaciones de tierras fueron la fuerza impulsora de la reforma agraria a lo largo del período de independencia, a pesar del modelo oficial de adquisición de tierras. Este último estaba comprometido con el principio del mercado, primero en concordancia con las disposiciones constitucionales de Lancaster House y luego con los términos del programa de ajuste estructural. Sin embargo, al expirar las primeras, el gobierno comenzó a redefinir el modelo oficial, promulgando leyes en 1992 que habilitarían la adquisición compulsiva, aunque sin implementar efectivamente dicha adquisición o reemplazar el método de mercado. Los tres modelos –popular, mercado y estado– interactuarían dinámicamente a lo largo de la década del ajuste estructural (Moyo, 2003).

El proceso de reforma agraria se podría dividir en tres períodos: 1980-1992, caracterizado por el predominio relativamente seguro del método de mercado; 1992-1999, caracterizado por el inicio de un desafío oficial a dicho método y que llevaría a una amenaza real de la adquisición compulsiva en 1997, en el contexto de la profundización de la crisis social y política; y 2000-2002, el período en el que el método de mercado se abandonó rotundamente y fue reemplazado por la adquisición radical, compulsiva.

LA INTERACCIÓN DE LOS MODELOS DE REFORMA AGRARIA

El primer período puede subdividirse en dos, 1980-1985 y 1985-1992. En el primero se puso énfasis político en un compromiso activo con el mercado y en la entrega de tierras al campesinado; en el segundo, la redistribución de tierras disminuyó junto con el deteriorado estatus fiscal del Estado y el aburguesamiento del movimiento de liberación. En tanto en el primer período el partido gobernante buscó apaciguar su distrito electoral más importante, en el segundo, la base social del partido gobernante se desplazó a la ascendente burguesía negra y se abrió una grieta entre éste y el campo.

La táctica de ocupación de tierras todavía no se abandonaría entre un período y el otro; sólo se modificaría en forma. Los primeros años de la independencia se caracterizaron por “ocupaciones de gran intensidad y de bajo perfil” (Moyo, 2001b), a las que los líderes políticos del nivel local del partido gobernante, principalmente en la provincia de Manicaland, les dieron apoyo simpatizante y hasta alentaron. En esos años, el ritmo de las adquisiciones y de la redistribución de la tierra a través del mercado fue relativamente rápido, sumando, en total, aproximadamente 2.200.000 hectáreas, a 430 mil hectáreas por año. Éstas incluían terrenos que habían sido abandonados por sus dueños blancos en las zonas liberadas durante la guerra y eran, por lo tanto, más fáciles de adquirir. En Matabeleland, las ocupaciones y el proceso de reforma agraria fueron víctimas de las peleas de poder entre ZANU-ZAPU y las enérgicas medidas de seguridad del Estado. Sólo después de los Acuerdos de Unidad de 1987, el clima político en Matabeleland empezó a tolerar los reclamos de tierra, pero nuevamente con pocos resultados, puesto que la postura del gobierno frente al tema estaba empezando a cambiar.

Entre 1985 y 1992, el ritmo de las adquisiciones a lo largo del país disminuyó dramáticamente a 75 mil hectáreas por año y a un total de aproximadamente 450 mil hectáreas. Esta desaceleración fue acompañada por una revocación de la respuesta política a las ocupaciones de tierras en el nivel local, que incluyó las provincias de Mashonaland, y por una transformación de esas ocupaciones en lo que podríamos denominar una “intensidad normal baja” (Moyo, 2003). Significativamente, desde 1985 en adelante, el Estado estableció un aparato de “control de usurpadores” a nivel local, a través de Comités de Control de Usurpaciones bajo la responsabilidad del Ministerio de la Administración Local, con el propósito de monitorear el autoaprovechamiento ilegal de tierras y de llevar adelante desalojos en masa (Alexander, 1993; Moyo, 2000; Yeros, 2002b). Lo que esto significaba, en realidad, era que, por un lado, el semiproletariado había perdido cualquier influencia informal que alguna vez hubiera tenido sobre la

política agraria nacional pero, por el otro, que el Estado no podría poner frenos al proceso de autoaprovisionamiento de tierras, ni siquiera a través del control de los usurpadores. De esa manera, se llegó a un punto muerto en la batalla por la tierra y se constituyeron los aspectos de fondo del ajuste estructural.

En el período 1980-1992, la reforma agraria dirigida por el mercado demostró ser incapaz de hacer frente a la cuestión de la tierra en Zimbabwe. El proceso, además de ser lento y progresivo, también distribuyó suelos de bajo valor agro-ecológico e impuso onerosas demandas fiscales a un Estado ya financieramente limitado. Como se señaló en otro lado (Moyo, 2002), sólo una proporción muy pequeña de la tierra adquirida era de valor agro-ecológico de primera (19%), el resto estaba en las regiones menos fértiles. A mediados de la década de 1980, el Estado se dio cuenta de que estaba recibiendo ingresos cada vez más bajos a cambio de sus recursos consagrados a la adquisición de la tierra. Eso era lo que estaba sucediendo, a pesar de que el Reino Unido, como ex potencia colonial, otorgaba financiamiento para la reforma agraria. En total, Gran Bretaña contribuyó con 44 millones de dólares estadounidenses, un monto groseramente inadecuado para resolver la cuestión agraria en Zimbabwe. La naturaleza lenta y esquiva del proceso de reforma se convertiría, a partir de mediados de la década del ochenta, en una fuente de conflictos diplomáticos amargos entre los gobiernos de Zimbabwe y del Reino Unido (Matondi y Moyo, 2003). A esto se sumaba, además, la aparición gradual de granjeros comerciales negros a gran escala, que también se habían beneficiado del método de mercado.

Este conflicto se intensificó cuando expiraron las disposiciones constitucionales de Lancaster House del principio de “vendedor dispuesto, comprador dispuesto” para las transferencias de tierra, y la promulgación de disposiciones constitucionales para la adquisición compulsiva. En 1990, a pesar del lanzamiento del ajuste estructural, el gobierno dio señales de un cambio de dirección de la política agraria, y en 1992 dispuso una nueva Acta de Adquisición de Tierras que legalizaba la obtención compulsiva y otorgaba compensaciones y recursos legales sin desplazar el principio de mercado. En adelante, el método de mercado continuaría prevaleciendo en el proceso político –puesto que el ajuste estructural hundió la cuestión de la tierra decididamente– pero, de todas maneras, ambos métodos (estado y mercado) entrarían en un período de competencia abierta. La adquisición compulsiva era el método favorito, no sólo del semiproletariado, sino también y de forma más inmediata, de la ascendente clase burguesa negra. De hecho, el capital negro intensificaría, durante los noventa, su presencia en el sector de la agricultura comercial a gran escala, de modo que

hacia fines del período de reforma basado en el mercado, surgieron cerca de ochocientos granjeros comerciales negros a través de la compra o del arriendo de casi un 10% de la tierra destinada a la agricultura comercial a gran escala. En conjunto, el ritmo de la reforma agraria seguía siendo lento. Entre 1992 y 1997 se adquirieron alrededor de 790 mil hectáreas, a un ritmo de 158 mil hectáreas al año; esto incluía el reasentamiento de seiscientas familias campesinas desplazadas por la construcción de la represa Osborne.

La combinación del ajuste estructural con la “nativización” de la cuestión agraria ha tenido su corolario en la intensificación de las ocupaciones de bajo perfil. Las demandas de tierra y de sus recursos naturales se incrementaron entre las unidades domésticas semiproletarias, tanto en las áreas rurales como en las urbanas, cuando se recortó el empleo público y el privado, se redujo el salario real y los ingresos de las granjas menguaron (Moyo, 2000). Por esta causa, surgieron nuevas tendencias de usurpaciones durante los noventa. Una de ellas consistió en la propagación de las usurpaciones de las áreas de agricultura comercial a gran escala hacia otros regímenes de tenencia de la tierra, a tal punto que el mayor volumen de las usurpaciones reconocidas oficialmente se hallaba ahora en las áreas comunales (33%), en las áreas de reasentamiento (12%), en las áreas urbanas (10%), en las tierras estatales (31%) y sólo una minoría (el 14%) se encontraba en las granjas comerciales (Moyo, 1998). Otra tendencia fue que las ventas de tierra y las rentas de mercado se profundizaron en *el interior* mismo de las áreas comunales y de reasentamiento. El derecho al título de esa tierra es legalmente conferido al Estado y administrado, en primera instancia, por las autoridades tradicionales de manera consuetudinaria. Pero durante los noventa, la mercantilización de la tierra comunal se incrementó mucho a partir del pago de honorarios o de obligaciones políticas a los miembros locales del parlamento, a los jefes, los dirigentes y los médium espirituales. A su vez, se intensificaron los conflictos por la tierra entre los “pobladores” y los “usurpadores”.

Estas nuevas tendencias en las usurpaciones hicieron que el “control de usurpaciones” fuera aun menos efectivo, aunque el aparato continuó aplicándose mediante vigilancia. En 1992, se reconstituyó la política de control de usurpaciones en el interior del Ministerio de la Administración Local para establecer una jerarquía de comités de control nacional, provincial y municipal de las usurpaciones, así como para garantizar a “la autoridad de la tierra o al propietario” el poder legal para desalojar. En efecto, esto significaba que el problema nacional de la tierra se “municipalizaría” a nivel de la tierra comunal y que se “privatizaría” a nivel de las granjas comerciales. Sobre estas bases, se llevaron a cabo sucesivos desalojos en masa bajo el programa de ajuste estructural, en

algunos casos involucrando a cientos de familias usurpadoras al mismo tiempo, y con un estilo que remitía a los métodos del Estado colonial blanco (Yeros, 2000b).

**EL NACIONALISMO Y LA REFORMA AGRARIA
RE-RADICALIZADA, 1997-2002**

Al final del primer programa de ajuste estructural en 1996, la política nacional llegó a un punto de ebullición tal que desafió severamente la legitimidad del partido gobernante como “guardián” de la nación. Las huelgas se extendieron del sector privado al público y los sindicatos de esos trabajadores (la Asociación de Empleados Públicos) se afiliaron incluso al ZCTU, oponiéndose abiertamente a la táctica del gobierno de “divide y reinarás”. En 1997, las huelgas afectaron a varias industrias, como la construcción, el comercio, la hotelería y el abastecimiento de alimentos, la textil, la del cemento y la cal, la ferroviaria, las cámaras urbanas, el correo y las telecomunicaciones. En total, hubo en el año más de doscientas treinta huelgas en dieciséis sectores. Lo más notable fue que los trabajadores rurales realizaron por primera vez una huelga de brazos caídos en protesta por las malas condiciones salariales y de trabajo, cuyos haberes representaban menos de un sexto a lo considerado el umbral de la línea de pobreza.

Sin embargo, el partido gobernante no sólo era desafiado desde afuera. También se estaban creando problemas de polarización interna, marcados por el retorno de los veteranos de guerra a la política nacional a través de la Asociación de Veteranos de Guerra por la Liberación Nacional de Zimbabwe. Éstos demandaron que el Estado los compensara a través del presupuesto nacional, cuestión que estuvo precipitada por un escándalo financiero y el colapso del Fondo de Compensación de los Veteranos de Guerra subsidiado por el Estado. Si bien para el análisis académico y los medios de comunicación éste parecía ser un pedido en “beneficio propio” se trataba, además, de un indicador de la división de clases dentro del mismo partido gobernante entre, por un lado, las elites al frente de la “nativización” y, por otro, los escalones más bajos del escalafón, muchos de cuyos integrantes vivían en la pobreza y nunca habían logrado acomodarse con el Estado postindependiente. Es más, las demandas sonaban a nacionalismo re-radicalizado y a descontento con el curso de la liberación nacional. El gobierno sucumbió a estas demandas y desembolsó un gran paquete de compensaciones que no habían sido previstas en el presupuesto nacional. Incluso volvió a prestar atención a la cuestión de la tierra, designando la adquisición compulsiva de 1.470 granjas comerciales blancas y prometiendo el 20% a los veteranos de guerra. Estas medidas sumieron a la economía en una espiral descendente provocada, además, por la caída del 74% del dólar de Zimbabwe

en un día (14 de noviembre). Estas jugadas también parecían ser en “beneficio propio” –en este caso, para el presidente Mugabe–, pero de hecho, el desafío de los veteranos de guerra era de una magnitud diferente, ya que estaban firmemente alojados en el aparato estatal y además a cargo de la seguridad, la del presidente inclusive.

De allí en más, los acontecimientos tomarían en Zimbabwe una dirección diferente. Se abandonó el segundo programa de ajuste estructural (ZIMPREST), se suspendió la balanza de pagos apoyada por el FMI, y la economía sufrió un rápido declive. Pero aún no había llegado el momento de la reforma agraria y del cambio estructural radical, ya que las granjas blancas enlistadas por el gobierno no fueron adquiridas. En cambio, el peligro de las adquisiciones compulsivas galvanizaría a nivel nacional la cuestión de la tierra, incluso internacionalmente, dando lugar a una nueva ronda de negociaciones con los donantes extranjeros, entre los que se encontraba el Banco Mundial y el gobierno británico. En 1998, se llevó a cabo en Harare una Conferencia de Donantes, en la que se alcanzó un tenso acuerdo sobre las adquisiciones compulsivas y de mercado, así como sobre otros métodos complementarios. En la víspera de la conferencia, una ola de notorias ocupaciones de tierras arrasó el país por primera vez desde los remotos años de la independencia. Ésta había sido organizada de forma laxa a nivel local por disidentes políticos del partido gobernante, líderes tradicionales, trabajadores desplazados y la Asociación de Veteranos de Guerra por la Liberación Nacional, lo que demostraba las divisiones de clase en el interior del partido gobernante (Moyo, 2001a). El gobierno toleró intermitentemente esa ola de ocupaciones y las utilizó como instrumento contra los donantes, pero estaba claro que el gobierno no tenía el control. No mucho tiempo después, recurriría al uso de la fuerza para controlar a los ocupadores y prometió acelerar la reforma. Los campesinos, por su parte, aceptaron “esperar”.

Entre 1998 y 2000, a pesar de los acuerdos de la conferencia, no se efectivizó ningún progreso en relación con la cuestión agraria. En cambio, la política nacional siguió recalentándose, especialmente con el lanzamiento del MDC y la euforia que despertaba la perspectiva de poder derrotar al partido gobernante en las elecciones del nuevo milenio. A decir verdad, en el año 2000, el partido gobernante atravesaba la crisis de legitimidad más severa desde la independencia. Y fue en esa época cuando el equilibrio de las fuerzas de clase en el interior del partido gobernante se inclinó a favor de las soluciones nacionalistas radicales. En febrero de 2000, las ocupaciones masivas, lideradas por los veteranos de guerra, comenzaron en el sur de la provincia de Masvingo y se extendieron hacia todas las provincias, de forma tal que en su punto máximo, en junio, el gobierno implementó adquisiciones compulsivas y redistribuciones

en masa y se ocuparon cerca de ochocientas explotaciones. Hacia fines de 2002, la reforma agraria “vía rápida” había adquirido compulsivamente 10 millones de hectáreas –aproximadamente el 90% de la tierra de agricultura comercial blanca– y había redistribuido la mayor parte de ésta a 127 mil unidades domésticas campesinas y a 8 mil granjeros capitalistas medianos (aspecto que se analiza más abajo). En el curso de esta rebelión, se manipularon las elecciones nacionales y se sometió violentamente a la sociedad civil; el resultado fueron unas cien muertes relacionadas con la política, entre 2000 y 2002. La violencia también produjo muertes en las granjas (como la de seis granjeros blancos y once trabajadores rurales), e incluyó casos de violación y tortura.

A medida que la temperatura subía en la política nacional, la política internacional entraba en un período de renovado conflicto, con una guerra de propaganda internacional, un boicot financiero e inestabilidad regional. La prensa privada nacional y las cadenas internacionales, conducidas por la británica, denunciaron que las reformas agrarias eran “arrebatos de tierras” y que el partido gobernante era una “dictadura corrupta y brutal”; se llegó, por lo demás, a comparar al presidente Mugabe con “Milosevic”. El MDC y el ZCTU se sumaron al repertorio imperial pidiendo “elecciones libres y multipartidarias justas”, e hicieron alianza con los granjeros comerciales blancos en contra de la reforma agraria. Los fondos y las donaciones extranjeras abandonaron el país para comenzar un largo boicot internacional, con excepción de aquellos que tenían propósitos “humanitarios”. Y los propios Estados regionales y las sociedades civiles se vieron forzadas a elegir bando, los primeros defendiendo con precaución la reforma, y las últimas, generalmente, condenándola. Por su parte, el nuevo Movimiento Popular de los Sin Tierra (LPM, por su sigla en inglés) de Sudáfrica entró en el ámbito de la sociedad civil. De inmediato se vio enfrentado a la contradicción de formar alianzas civiles y de apoyar, al mismo tiempo, una estrategia nacionalista radical respecto de la tierra; en los hechos, el LPM defendió las ocupaciones.

Ciertamente hay mucho para criticar en el proceso de reforma agraria de Zimbabwe. Pero no sería posible hacerlo sin identificar su estructura y su dinámica de clases, sus debilidades y sus defectos, pero también sus logros y, en efecto, su naturaleza fundamentalmente progresista.

LA ESTRUCTURA DEL MOVIMIENTO DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

Las ocupaciones de tierras se desplegaron de una manera compleja, con particularidades locales y regionales, pero compartieron una base social común –la del semiproletariado rural–, por sobre las diferencias étnicas, regionales y de género. La fuerza del movimiento se debe buscar precisamente en esta base social y, más aun, en su compromiso militante

hacia la recuperación de tierras, un compromiso que ninguna otra organización cívica había deseado asumir. Con el tiempo, esta base social se expandió para incluir a los pobres urbanos y a la pequeña burguesía, quienes también habían sido cooptados por el programa de redistribución de vía rápida. Esto fortalecería el movimiento, especialmente al conectar a los pobres rurales con los pobres urbanos, en la medida en que la propuesta de la pequeña burguesía no amenazase, aún, el contenido general de clase del movimiento. Se fortaleció además, en su momento, por la aprobación que recibió del *lobby* capitalista negro y, en última instancia, por la articulación de una tensa pero resuelta alianza nacionalista sin distinción de clase sobre el tema de la tierra, por mediación de la Asociación de Veteranos de Guerra por la Liberación Nacional. En este caso, tampoco el *lobby* capitalista negro amenazaría el contenido de clase trabajadora del movimiento. En suma, esta alianza nacionalista transversal se opondría a la alianza de la sociedad civil “posnacional” entre clases (o “nacional cívica”), entre la que se contaban el MDC, los sindicatos, las ONG y los granjeros blancos.

El movimiento de ocupación fue organizado y dirigido por la asociación de veteranos de guerra. Ésta fue una gran fuente de fortaleza que combinaba la militancia en la cuestión agraria con una estructura organizativa que atravesaba al Estado y a la sociedad. Los veteranos de guerra activaron sus raíces de organización tanto en los distritos rurales, a través de las ramas locales de la asociación, como en todos los niveles del aparato del Estado: el gobierno local y central, la policía, los militares, la Organización Central de Inteligencia, los medios estatales de comunicación (prensa, televisión y radio) y el partido gobernante. Esta penetrante estructura en red contendría la única posibilidad de movilizar las áreas rurales y el aparato estatal por la causa de la tierra.

La elite burocrática, sin embargo, buscó sembrar su hegemonía en las ocupaciones de tierra e incluso apropiarse de la reforma agraria. Lo logró a través del control del contenido ideológico de las representaciones mediáticas del “Tercer Chimurenga” (Insurrección); de la insistencia en el uso de un derecho estatal, definido legislativamente (es decir, con enmiendas a la Constitución y al Acta de Adquisición de Tierras) para expropiar las tierras ocupadas y las mayores extensiones requeridas por el movimiento en expansión; de la custodia de la política de reforma tal como estaba definida en los documentos del programa de vía rápida; y de la supervisión de su aplicación en el nivel central y en el nivel provincial. De esta manera, el movimiento de ocupación de tierras se volvió gradualmente “programatizado”.

En este contexto, la asociación de veteranos de guerra también sería, por diversas razones, una fuente de debilidad para el movimiento. En primer lugar, esta asociación surgió como un movimiento de “tema úni-

co”, focalizándose exclusivamente en la cuestión inmediata de la recuperación de tierras y no en las cuestiones político-económicas a largo plazo, particularmente durante la fase posterior a la vía rápida. En consecuencia, la asociación de veteranos no buscaría establecer ni un automantenimiento ni estructuras organizacionales democráticas campesino-obreras, con vistas a prepararse para la educación política basada en la clase a largo plazo y para la lucha ideológica. En tercer lugar, mientras su nacionalismo era orgánico e indispensable, su contenido de clase no estaba claramente articulado. El movimiento defendía un nacionalismo militante anticolonial, que se centraba orgánica e ideológicamente en la recuperación de tierras. Y aunque esto fuera efectivo para dicha recuperación, la dirección de clase del movimiento se vio amenazada por el conflicto de clases en el interior de la propia Asociación de Veteranos de Guerra por la Liberación Nacional, del partido gobernante y de la burocracia.

La táctica principal del movimiento era la ocupación de tierras. Se basaba en las ocupaciones previas, esporádicas y dispersas, específicamente en aquellas que tuvieron lugar durante la Conferencia De Donantes en 1998. La nueva y mayor ola de ocupaciones comenzó en febrero de 2000, luego de un *referéndum* pre-electoral sobre la reforma constitucional, con el que la propuesta del partido gobernante fue derrotada y señalado el “final del juego” para el movimiento de liberación. Las ocupaciones comenzaron en Masvingo, pero se extendieron a las provincias de Matabeleland y de Mashonaland, lentamente en la primera y más velozmente en la última, que muy pronto se convertiría en su epicentro (Alexander y MacGregor, 2000; Moyo, 2001a). Las ocupaciones se centraron en las granjas blancas pero también, esporádicamente, en las de los capitalistas negros y de la elite política. Al principio, ocuparon tierras subutilizadas, pero ello se reformularía para incluir las tierras productivas, en particular aquellas que se ajustaban a otros criterios, como la propiedad múltiple, la propiedad extranjera y la contigüidad a las áreas comunales. Se expandieron a las áreas periurbanas, entrando a través de los elementos urbanos pobres y de la pequeña burguesía. En unos pocos casos, el liderazgo de las ocupaciones no fue ostentado por los veteranos de guerra sino por parlamentarios individuales y por líderes tradicionales, quienes buscaron “formalizar” sus ocupaciones apelando a los veteranos de guerra. Hubo también instancias de antagonismo entre las iniciativas locales y los estratos más altos de la estructura de mando de los veteranos de guerra, que provocaron fricciones dentro del movimiento. La violencia se impuso, aproximadamente, en unas trescientas granjas, según las reacciones de los granjeros y las relaciones con sus trabajadores.

En algunas ocasiones, estos trabajadores apoyaron y se unieron a las ocupaciones de tierras, en tanto en otras se resistieron mediante la violencia y los desalojos. Ésta demostraría ser otra debilidad del

movimiento: su rápida aparición. La ausencia de un proceso preexistente de educación política y de movilización en el campo enfrentaría a los trabajadores sin tierra con los trabajadores rurales en un clima de desconfianza en el que se percibía a estos últimos como movilizados por los terratenientes para votar en contra de las propuestas constitucionales del gobierno. Por un lado, los representantes gremiales nunca habían movilizado a los trabajadores rurales para recuperar tierras pero, en cambio, sí se habían centrado siempre en cuestiones reformistas laborales (salarios y condiciones de empleo). Por otro, los veteranos de guerra tenían una postura ambigua e incluso arrogante para con los trabajadores rurales, viéndolos incapaces de desarrollar una conciencia política nacionalista. En esta tensa coyuntura, los trabajadores rurales debían elegir entre defender su trabajo y a sus empleadores o unirse a las ocupaciones y esperar conseguir tierras, bien a través de los veteranos de guerra en forma directa, bien de los vínculos familiares en las áreas comunales. Una minoría de trabajadores rurales de origen no zimbabwense se encontraba en una situación particularmente precaria, al igual que las mujeres de los trabajadores rurales, la mayoría de las cuales se empleaba de forma casual en las granjas y tenía poco acceso por su propia cuenta al proceso de solicitud de tierras en las áreas rurales. Así, estos trabajadores se hallaban en un antagonismo confuso, por el cual sus antiguos empleadores y explotadores –los dueños de la tierra– los defendían y, al mismo tiempo, se oponían a la redistribución de la tierra. Esta contradicción no se resolvió por iniciativa de los veteranos de guerra, que no veían apropiado ganarse a los trabajadores rurales proporcionándoles un adecuado acceso a la tierra (esto es, a más del 5% de los 150 mil trabajadores desplazados, tema que se discute más abajo).

Finalmente, la estrategia de buscar la reforma agraria a través del Estado y del partido gobernante resultó ser tanto una debilidad como un punto fuerte del movimiento de ocupación de tierras. Por un lado, el partido gobernante procedió rápidamente haciendo reformas constitucionales para facilitar los procedimientos de adquisición compulsiva, modificando las provisiones existentes para la compensación al limitarla a las mejoras sobre la tierra y, explícitamente, relegando cualquier otra responsabilidad de compensación al gobierno británico. Éstas se complementaron con decretos presidenciales, bajo el Acta de Poderes Presidenciales, para enmendar el Acta de Adquisición de Tierras (2000) varias veces, de modo de posponer la compensación y quitar el recurso legal y otros impedimentos procesales que evitaban la adquisición de tierras. A partir de entonces, el partido gobernante aprobó el Acta (Protección contra los Desalojos) de Ocupadores de Tierras Rurales en 2001, con lo que los sin tierra tendrían protección legal ante los desalojos. Estos cambios legislativos fueron producidos a través del enfrentamiento sucesivo

con las Cortes Alta y Suprema, responsables de proteger la propiedad privada. En el campo, el aparato de seguridad del Estado (policía, militares y CIO) intervendría para dar apoyo logístico al movimiento y para protegerlo de la posible militarización de los dueños de la tierra y de otro tipo de violencia que escapara a su control. Finalmente, el Estado también difundió propaganda de guerra a través de sus medios de comunicación, al punto de amenazar la existencia de los medios privados (a fines de 2003 fue cerrado el periódico privado líder *Daily News*).

Por otro lado, la estructura fundamentalmente burguesa de la burocracia no se disolvería. Esto quiere decir que la dirección del movimiento de ocupación de tierras sería incapaz de, e incluso se mostraría renuente a, arrebatarse a la elite negra el poder del Estado y del partido gobernante. En cambio, esta elite sí empleó el aparato del Estado para conservar su poder y reafirmarse en la política nacional, utilizando la misma táctica que se empleaba durante los períodos colonial y neocolonial: la separación orgánica del semiproletariado entre el campo y la ciudad. Además de ayudar y proteger al movimiento de ocupación, la dirección del partido gobernante hizo uso del aparato de Estado para aislar a los obreros urbanos organizados de sus contrapartes rurales, reprimiendo las movilizaciones de los trabajadores urbanos, persiguiendo a los líderes sindicales y desorganizando sus estructuras. El objetivo inmediato de esta instrumentación de la violencia sería doble: salvaguardar el proceso de reforma agraria del sindicalismo reaccionario y asegurar las elecciones presidenciales (marzo de 2002) y legislativas (junio de 2000) en contra de la alianza “posnacional”. No obstante, esta práctica sobreviviría tanto a la reforma por vía rápida como a las elecciones, al punto de que disolvió sistemáticamente cualquier núcleo de organización obrera por fuera del control de la elite del partido gobernante, tanto en el campo como en la ciudad.

Es en este proceso contradictorio que el equilibrio de clases en la alianza nacionalista comenzaría a estar en contra del semiproletariado. La elite negra ejerció su poder burocrático no sólo para hacerle lugar a la pequeña burguesía negra en las 7 mil doscientas sesenta granjas capitalistas pequeñas y medianas, sino también para su propio rédito, apropiándose de 150 mil hectáreas (0,5% de la tierra adquirida) y beneficiando a ciento setenta y ocho de sus integrantes. Esto llevó a que el proceso de reforma se mantuviera lejos de varias propiedades agroindustriales privadas (individuales y corporativas) y fiscales clave. En suma, se aseguró que la tierra redistribuida entre el semiproletariado tuviera un potencial agro-ecológico relativamente bajo y un acceso limitado a la infraestructura de irrigación. La clase trabajadora urbana fue fragmentada durante el inicio de la reforma agraria, con el propósito de construir viviendas para los sin techo y otros que también buscaban conseguir este nuevo título de propiedad a través de las ocupaciones

urbanas; se les ofreció, a más de 10 mil familias, pequeñas parcelas (de entre 3 y 20 hectáreas) en la zona periurbana. Incluso, al concluir la redistribución por vía rápida y marchitarse el movimiento de ocupaciones bajo la dirección –con un único objetivo– de la asociación de veteranos de guerra, sólo quedaron unas pocas estructuras políticas organizadas entre los campesinos para poder ejercer influencia sobre la fase posredistributiva de la reforma agraria.

Podríamos concluir que la estrategia de buscar la reforma agraria a través del Estado y del partido gobernante no llegó lo suficientemente lejos *dentro* del partido gobernante y del Estado como para salvaguardar el carácter campesino-trabajador del movimiento, o como para preparar orgánicamente al semiproletariado contra la embestida de la burguesía negra, especialmente en la fase posterior a la vía rápida. A pesar de ello, también debemos admitir que el movimiento de ocupación logró la expropiación forzada del 90% de la tierra de agricultura comercial, aumentando significativamente la estructura del mercado doméstico, deshaciendo la estructura racializada de la lucha de clases y sentando las bases fundamentales para la próxima fase de la revolución democrática nacional.

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA NACIONAL EN UNA ENCRUCIJADA

El debate académico sobre la reforma agraria fracasó en identificar la dinámica de clases del proceso, señalando, en cambio, dos campos que se enfrentaban, los “posnacionalistas/cívicos” y los “nativistas”, ambos integrados por liberales y marxistas autoconfesos, y todos reproduciendo las categorías de la ciencia social burguesa. Mientras el primer campo procedió a denunciar la reforma como un mero “asalto al Estado”, sin ningún tipo de análisis específico del Estado neocolonial, de la sociedad civil o del movimiento de ocupación de tierras y de su nacionalismo (Hammar, Rafttopoulos y Jensen, 2003; Bond y Manyanya, 2002), el segundo defendió la reforma pero opacando las luchas de clase en el movimiento de liberación y celebrando la vía rápida como si fuera la culminación del “fortalecimiento negro”, en línea con las prioridades de acumulación de los grupos de presión nativistas.

Ninguna de estas dos posiciones podía ser realmente útil a la fase siguiente de la revolución democrática nacional. Ésta permanece en una coyuntura crucial y requiere un análisis crítico continuo. El resultado inmediato de la reforma es claro y urgente, está marcado por la pobreza cada vez mayor y la incapacidad de restablecer el abastecimiento de alimentos a la población. Por un lado, el imperialismo sigue ejerciendo su poder financiero en forma deliberada para aislar a Zimbabwe y sofocar el proceso de la reforma agraria, de modo que la inflación de la moneda es del 500%, se impide severamente la recuperación de la

producción agrícola –sumado a dos años de sequía regional– y se relega a la población urbana y rural a un estado de “ayuda humanitaria”. Por su lado, el Estado todavía no consigue divisar un plan coherente de reconstrucción y desarrollo, dado que no puede persuadir a los capitales privados de ingresar en un plan nacional de acumulación interna. Esta situación se demora todavía más por la ausencia de unidad entre la clase trabajadora del campo y la ciudad (debilitada, por otra parte, por la caída de la producción de alimentos), y se compone de la continua represión a la sociedad civil y del dominio emergente de la burguesía negra en el proceso de dictado de políticas públicas contra los intereses de los campesinos y trabajadores. El peligro consiste en volver a caer en un proceso de compra sistemática [*re-compradorization* en el original] y de recolonización bajo la dictadura de la burguesía y en no conseguir, finalmente, desarrollar la potencialidad de la nueva estructura agraria.

LA NUEVA ESTRUCTURA AGRARIA

No es posible realizar aquí un análisis exhaustivo de la nueva estructura agraria (ver Moyo, más adelante). A continuación brindamos una visión global condensada de la misma. Nuestra información proviene del informe del Comité Presidencial de Revisión de la Tierra (PLRC) presentado en julio de 2003. El presidente designó este comité en respuesta a la presión constante que ejerció el partido gobernante para volver a debatir el tema e incluir, además, la cuestión del estatus de los trabajadores rurales y de la apropiación indebida de tierras por parte de las élites. La tabla 1 contiene las cifras de la redistribución y de la adquisición de tierras a través de la reforma de vía rápida, y está organizada según los regímenes de tenencia de la tierra en Zimbabue. La tabla 2 combina esos números con cifras que hacen referencia a las haciendas preexistentes o restantes para dar una imagen holística de la estructura agraria hoy, y se reorganiza para captar, en cuanto sea posible, la estructura de *clases* emergente que no se alcanzaría a comprender *per se* con el tamaño y el tipo de tenencia de los cultivos (ver tabla 2 en página 212).

El fenómeno de la recampesinización ha sido dominante durante la reforma agraria de vía rápida: los nuevos establecimientos productores de pequeñas mercancías eran en total el 93,7% de los nuevos establecimientos agrícolas, es decir, mucho más del 40,7% de la tierra adquirida; casi todos (97%) tomaron sus lotes. La mayoría de los beneficiarios eran originarios de las áreas comunales. El proceso se combinó con un renovado “camino mercantil” de los profesionales urbanos, la pequeña burguesía y los burócratas, sumando unas 7 mil doscientas sesenta granjas pequeñas, medianas y grandes, sobre el 21% de la tierra adquirida, y con una tasa de continuidad menor (66%). Los habitantes de la ciudad, además, ingresaron en el modelo A1, de modo que estimamos que los beneficiarios

urbanos fueron aproximadamente el 20% del total. El proceso de reforma achicó el tamaño de los terrenos y retuvo (en vez de expropiar completamente) 1.332 granjas comerciales blancas a gran escala. Notamos, también, que para julio de 2003, una gran cantidad de suelos (26,9%) no se había asignado y permanece aún sujeta al proceso político.

Un análisis más profundo de las cifras (ver Moyo, más adelante) muestra que los veteranos de guerra recibieron menos tierras que las originalmente destinadas a ellos y que los más perjudicados fueron las mujeres y los trabajadores rurales. Los veteranos recibieron menos del 20% de lo dispuesto por el gobierno en un principio, luego del listado inicial de granjas en 1997. Estimamos que un máximo de 25 mil veteranos de guerra, ex detenidos y *mujibhas* (colaboradores jóvenes en la lucha de liberación) recibieron el 10% del total de las tierras, la mayoría con tenencia A1 y con un promedio nacional de menos de 50 hectáreas por veterano de guerra. A su vez, las mujeres recibieron sus propios títulos a un promedio nacional menor al 16%, bajo el equivocado presupuesto de que las cabezas de hogar son frecuentemente hombres y las mujeres con necesidades de tierra están casadas o tienen acceso a ella a través de distintos vínculos familiares.

Tabla 1
Reforma de vía rápida: patrón de localización de tierras, 2000-2003

Tenencia de tierra	Colonos (familias agrícolas)		Área destinada al cultivo		Porcentaje de tierras tomadas (%)
	(No.)	(% total)	(Ha)	(% total)	
A1 (campesino)	127.192	93,7	4.231.080	40,7	97
A2 (capitalista)	7.260	5,3	2.198.814	21,1	66
LSCF restante	1.332	1,0	1.175.607	11,3	
Total de tierras distribuidas (hasta julio de 2003)			7.605.501	73,1	
Tierras no distribuidas (hasta julio de 2003)			2.800.000	26,9	
Total	135.784	100,0	10.405.501	100,0	

Nota: el tipo de tenencia A1 consiste en el derecho de uso de una parcela familiar, más tierra común para pastoreo; las parcelas familiares son heredables pero no comercializables. El tipo de tenencia A2 consiste en un título de arrendamiento con opción a compra. La tenencia LSCF (*Agricultura Comercial de Gran Escala*, según su sigla en inglés) consiste en un título de dominio individual.

Fuente: Calculado por el Comité Presidencial de Revisión de la Tierra (del inglés PLRC), 2003.

Tabla 2
Estructura de la clase agraria emergente

Clase	Tenencia de tierra	Casa/granja		Zona de cultivo		
		(No.)	(% total)	(Ha)	(% total)	(Prom. ha)
Proletariado en transición (empleados, ocasionales, desempleados)	Residentes de granjas; reubicados en comunas; desamparados	(350.000)	s/d	s/d	s/d	s/d
Campesinado (semiproletariado, pequeño capitalista)	Comunas y A1	1.300.000	98,3	20.631.080	66,6	13,0
Pequeños/medianos capitalistas	Antiguos SSCF	8.000	0,6	1.238.700	4,0	155,0
	Nuevos A2	5.760	0,4	1.798.814	5,8	312,0
	Subtotal	13.760	1,0	3.037.514	9,8	
Grandes capitalistas	Grandes A2	1.500	0,1	400.000	1,3	267,0
	Negros LSCF	1.440	0,1	938.723	3,0	651,9
	Blancos LSCF	1.332	0,1	1.175.607	3,8	882,6
	Subtotal	4.272	0,3	2.514.330	8,1	
Capitalistas corporativos	Corporaciones	743	0,06	1.365.173	4,4	1.837,4
	Paraestatales	153	0,01	572.786	1,8	3.743,7
	Eclesiásticas	64	0,005	41.902	0,1	654,7
Tierras en transición	No distribuidas			2.800.000	9,0	
	Total	1.318.992	100,0	30.962.785	100,0	

Nota: Campesinos: tamaño de las tierras comprendido entre 1 y 30 ha., dependiendo de la región natural, con un espacio de tierra arable de entre 0,2 y 5 ha. más tierra común para pastoreo. Las tierras "Comunal" y A1 son del mismo tipo de tenencia; la primera refiere a tierras preexistentes, la segunda a tierras reestablecidas. *Pequeños y medianos capitalistas:* comprende "antiguos" granjeros del período colonial y los "nuevos" agricultores negros, incluyendo a aquellos distribuidos en las "granjas comerciales de pequeñas escala" (SSCF por su sigla en inglés) luego de la independencia y los beneficiarios de la reforma de vía rápida. Las granjas de "pequeños capitalistas" oscilan entre las 30 y las 100 ha., también dependiendo de la región natural. *Grandes capitalistas:* granjas de entre 150 y 400 ha. en NR I/II a 1.500 ha. en NR IV. *Granjas corporativas:* comprenden entre 1.000 y 1.500 ha., pero pocas se encuentran cerca del número mínimo de hectáreas.

Fuente: Calculado por el Comité Presidencial de Revisión de la Tierra (del inglés PLRC), 2003.

El caso de los trabajadores rurales ha presentado dificultades analíticas y empíricas debido a su "identidad" dual como trabajadores migrantes (nacionales y extranjeros) y como granjeros en las áreas comunales. Antes de la vía rápida, el sector de la agricultura comercial a gran escala (LSCF, por su sigla en inglés) contrataba a 350 mil trabajadores, de los cuales el 75% era de origen comunal. Si sumáramos las cifras oficiales de la vía rápida de los "trabajadores rurales" declarados y las estimaciones de los trabajadores solicitando terrenos como "campesinos sin tierra" por vía de las áreas comunales, es probable que fueran

el 5% (o el 8,75%) del total de los beneficiarios. Esto también significa que, como lo demuestran estudios recientes (Magaramombe, 2003; Chambati y Moyo, 2003; Sachikonye, 2003), un gran número de trabajadores rurales fue dejado de lado. De los 350 mil originales, la mitad eran trabajadores ocasionales y de tiempo medio (en su mayoría mujeres), y la otra mitad trabajadores permanentes (principalmente hombres). De estos últimos, el 50% (85 mil) eran empleados mayormente en las propiedades agro-industriales (especializadas en café, azúcar, té y plantaciones forestales) que no habían sido expropiadas, mientras que la otra mitad generalmente perdía su empleo y algunos trabajaban para los nuevos granjeros. Aproximadamente 80 mil de los trabajadores de medio tiempo y ocasionales continuaron trabajando en las granjas restantes del LSCF. La estimación general es que se dejó completamente de lado a 90 mil trabajadores rurales, siendo las mujeres las más afectadas. Estos trabajadores permanecieron en sus lugares de residencia en los cultivos, fueron reubicados en las áreas comunales o formaron nuevos “asentamientos informales” bajo condiciones desesperantes. Como consecuencia, las condiciones de trabajo en las nuevas plantaciones se deterioraron, y el trabajo ocasional y a destajo se incrementó.

Los castigos financieros que se impusieron desde el exterior a la economía de Zimbabwe, sumados a la incoherencia de la política interna y a la represión, continuarían agravando las condiciones de vida y de trabajo del proletariado y del semiproletariado rural y urbano. La persistente falta de tierra, el desempleo, el empleo casual, las malas condiciones de trabajo, los salarios bajos, los paupérrimos ingresos de los campesinos y la escasez de alimentos seguirían ejerciendo presión sobre los temas políticos y económicos del futuro a corto plazo. Mientras tanto, el nuevo campesinado de los terrenos A1 mantenía su estrategia semiproletaria dual de ingresos a través de la pequeña producción de productos básicos y del trabajo asalariado, en especial a medida que se aceleraban los procesos de diferenciación.

En la tabla 2 intentamos estimar la estructura de clases agraria emergente. Ésta es por naturaleza una tarea imprecisa y más si se tiene en cuenta que no hay nuevos datos censales y encuestas de hogares. Pero la cuestión sigue siendo esencial y su objetivo es capturar las capacidades (y las vulnerabilidades) diferenciales de los capitalistas en el proceso de acumulación. El criterio básico es el tamaño de los terrenos, que después se ajusta al tipo de tenencia, al potencial agro-ecológico y a la capacidad técnica. Los tipos de tenencia son particularmente importantes a la hora de comprender las desventajas de la tenencia comunal y A1 en la movilización de recursos. La agroecología varía en Zimbabwe de acuerdo con cinco Regiones Naturales (NR I-V), que van

desde las tierras más fértiles de menos hectáreas por explotación y de cultivo intensivo, hasta las menos fértiles de las granjas más grandes, de cultivo extensivo de grano fino y con manejo de los animales de cría/fauna. El nivel y el tipo de tecnología difieren, asimismo, de acuerdo con cada región.

La categoría “campesino” hace referencia a la pequeña producción de productos básicos en los asentamientos comunales y A1, que suman ahora el 98,9% del total de los cultivos, el 66,6% del total de la tierra. Existe una diferenciación de clase dentro de esta categoría, no tenida en cuenta aquí, generada por la variación agroecológica *inter alia*, los ingresos ajenos a la granja y el poder político local. Más allá de las condiciones económicas positivas o negativas, no se espera que esta diferenciación vaya a desaparecer mientras las operaciones del mercado informal de tierras continúen funcionando bajo la égida de la autoridad tradicional. Es notable que la institución de la jefatura no se haya visto amenazada en el proceso de movilización por la reforma agraria.

Aunque los “pequeños capitalistas” constituyeron históricamente menos del 10% del campesinado en las áreas comunales y emplean mano de obra no familiar de otros campesinos y a los sin tierra que quedaron allí, no los hemos clasificado dentro de la categoría debido a falta de datos. Sólo podemos señalar que es probable que sean muy importantes políticamente, puesto que posiblemente vuelvan a dominar al Gremio de Granjeros de Zimbabwe, junto con los pequeños capitalistas de la tierra A2. Al haber mucha superposición entre las regiones naturales, hemos fusionado tentativamente la categoría de “pequeños capitalistas” con la de “capitalistas medianos”. Por lo general, el tamaño de los pequeños capitalistas es de entre 30 y 100 hectáreas, y el de los capitalistas medianos de entre 40 y 150 hectáreas, y emplean mucha más mano de obra que la que les puede brindar su familia. Es importante señalar que es posible que estas dos categorías se reconfiguren continuamente, puesto que las dos compiten. Los capitalistas medianos tienen más ventajas sobre las licitaciones de tierras y en el proceso de acumulación, en virtud de su mejor acceso a otros medios de producción (el crédito y la tecnología), a los contactos e información y al proceso de confección de políticas públicas.

Las granjas “capitalistas grandes” poseen entre 150 y 1.500 hectáreas, según la región natural, y disfrutan de un mejor acceso a los recursos económicos y políticos. En la actualidad, los capitalistas medianos y grandes tienen una alianza política bajo la bandera de la “nativización” para configurar un esquema de políticas agrícolas a su medida y apropiarse de la tierra restante. Su visión consiste en un sector agrícola diferenciado, en el que los capitalistas medianos y grandes se especialicen en la elaboración de productos básicos de alto valor para exportación

(tabaco y carne de ganado híbrido), y los campesinos produzcan granos para el consumo interno. De este modo, las contradicciones entre los granjeros pequeños y los medianos y grandes y entre las orientaciones externas e internas se acentuarían, al pugnar por recursos públicos y privados (infraestructura, agua, crédito) y por instrumentos de política económica (tasas de interés, tipos de cambio). Por último, es importante señalar que entre los sectores económicos se está gestando un importante proceso de reorganización del capital, por medio del que la emergente burguesía agraria agrupa fuerzas, económicas y políticas, junto a la naciente burguesía nativa, en el transporte y en las ventas al por menor, y lo que es más importante, en las finanzas, que han visto nacer una docena de nuevas instituciones nativas. En conjunto, reconocen el valor de la producción agrícola y de la distribución para su propia reproducción.

Resulta importante observar que todos los granjeros capitalistas pagan salarios (ya sea por debajo o por encima del mínimo regulado) que están muy por debajo del umbral de la línea de pobreza actual (ver también Kanyenze, 2004). Esa mano de obra proviene de los trabajadores cercenados de la antigua LSCF, de los parientes desempleados de las unidades domésticas del área comunal y del número cada vez más alto de obreros urbanos sin trabajo.

La imagen que surge es la de un mercado interno significativamente extendido, que incluye a un campesinado y a una clase capitalista negra ampliados. Se necesitaría profundizar la investigación para examinar estos tres procesos interrelacionados: la reorganización agro-industrial y la consolidación de la clase capitalista negra; la diferenciación en el interior del campesinado, con las trayectorias de los campesinos ricos (pequeños capitalistas) y la de los campesinos pobres (semiproletarios); y el proceso de trabajo que refuerza los dos anteriores y que continuará caracterizándose por el dualismo funcional. Éste se consolidará aun más, en la medida en que más capital negro, con su reducida contraparte blanca, logre afianzar un patrón desarticulado de acumulación.

LOS NUEVOS DESAFÍOS

La mejor estrategia sería que el desarrollo nacional tuviera como prioridad la reconstrucción de la agricultura enfatizando el crecimiento del mercado interno. Es decir, con el propósito de la articulación social y sectorial (Amin, 1981). La carga de la agricultura es la más pesada de todas, puesto que incluye la producción para el consumo interno de alimentos (autosuficiencia y alimentación asegurada), la producción para el consumo industrial interno, y la producción para obtener ganancias en el intercambio con el mercado externo. El desarrollo industrial debería ser considerado un auxiliar para la modernización tecnológica de la agricultura y para la producción de bienes de consumo de masas y el

sector financiero debería estar subordinado a los requerimientos de inversión a largo plazo del desarrollo agro-industrial interno. Tal estrategia requeriría el control cuidadoso de las importaciones y la asignación de valor a la divisa, el repudio de la deuda, la desconcentración de los derechos mineros y la protección contra la institución de los derechos de propiedad de la tierra (que pueden promover la reconcentración de la misma); también resguardarse del capital agrario, que puede ir en contra de las necesidades de acumulación y de reproducción social de los granjeros pequeños y de los trabajadores rurales.

El destino de semejante estrategia, de todas maneras, estaría sujeto a la correlación de las fuerzas políticas entre el capital, el proletariado y el semiproletariado y entre el imperialismo y la autodeterminación nacional. En este sentido, la revolución democrática nacional se encuentra en un punto crítico. La tarea organizativa por realizar es la reconstitución de la clase trabajadora más allá de la división rural-urbano, independientemente del capital, del Estado y de la “civilidad” del sindicalismo internacional. El objetivo político sigue siendo lograr que el Estado se comprometa a hacer crecer el mercado interno, dejando de lado las aspiraciones de *comprador* [en español en el original] de la nueva burguesía agraria y de la ascendente clase media, que pugnan por el retorno al neoliberalismo y por las estrechas reformas democráticas liberales.

La reinstalación de las libertades políticas y civiles es fundamental para este proceso, pero también presenta el desafío de vencer las fuerzas civilizadoras (reaccionarias) que dejaría libres. La burguesía *compradora* se consolida a través de líneas políticas partidarias, y seguramente buscará sumar al Estado a su propia estrategia de acumulación y emplear tácticas represivas y de cooptación para dividir el semiproletariado con la segmentación rural-urbano y la corporización de la expresión política. Para esto será esencial la expansión de la autoridad tradicional a las áreas repobladas. Resistir las tendencias represivas del gobierno central y del gobierno local y defender un esquema redistributivo de asignación de los recursos nacionales debería ser la prioridad para avanzar en la revolución democrática nacional.

El proceso de trabajo emergente, cimentado en los sectores formal e informal, rural y urbano, es muy poco auspicioso. Se requiere un compromiso sistemático a largo plazo por parte de los sindicatos para liberarse de las alianzas en curso con el capital y para echar nuevas raíces en las áreas rurales y en las nuevas granjas, con el objetivo de enfrentarse a los empleadores negros nuevos y a la autoridad tradicional. A este respecto, el nuevo proceso de trabajo presentará espacios ideológicos a conquistar, como por ejemplo la reafirmación de un nuevo nacionalismo basado en la clase en contra del nacionalismo burgués racializado del grupo de la

“nativización” y en contra de la política democrática neoliberal. Al caer la hegemonía de la burguesía agraria blanca, los reclamos anticoloniales de la burguesía negra se atenuarán y se volverán improbables, en la medida en que la clase tiene cada vez más importancia (aunque, al mismo tiempo, el espectro del etnonacionalismo continuará siendo una amenaza). El desafío que se suma a la nueva organización de la clase obrera será crear un espacio proporcionado para las mujeres campesinas y para los trabajadores, que haga relevantes sus propias demandas específicas que ayude a ascender a las mujeres a las posiciones de liderazgo en sus líneas. A pesar de que esta lucha parezca muy distante en la actualidad, es un requisito esencial para enfrentar las estrategias de la autoridad tradicional, de la burguesía y de la burguesía agraria.

En el frente internacional, la organización de la clase obrera debe enfrentarse con el eurocentrismo del sindicalismo tradicional y del movimiento antiglobalización. La cuestión agraria está lejos de resolverse en Zimbabwe, a pesar de su radical reforma agraria. La acumulación interna exige la articulación de una nueva visión desarrollista que no sólo condene el neoliberalismo, sino que además formule, de manera clara, un esquema económico para la acumulación sustentable en la periferia y una estrategia política para su realización. Sólo entonces, el principio de la autodeterminación nacional comenzará a liberarse de su yugo imperial.

BIBLIOGRAFÍA

- Alexander, Jocelyn 1993 *The State, Agrarian Policy and Rural Politics in Zimbabwe: Case Studies of Insiza and Chimanimani Districts, 1940–1990*, tesis de doctorado (Oxford University).
- Alexander, Jocelyn y McGregor, JoAnn 2000 *Elections, Land and the Politics of Opposition in Matabeleland, Zimbabwe*, mimeo.
- Amin, Samir 1981 *The Future of Maoism*, traducción Norman Finkelstein (New York: Monthly Review Press).
- Arrighi, Giovanni 1973 “The Political Economy of Rhodesia” en Arrighi, Giovanni y Saul John S.(eds.) *Essays in the Political Economy of Africa* (New York: Monthly Review Press).
- Bond, Patrick 1998 *Uneven Zimbabwe: A Study of Finance, Development, and Underdevelopment* (Trenton, NJ. y Asmara: Africa World Press).
- Bond, Patrick, y Manyanya, Masimba 2002 *Zimbabwe's Plunge: Exhausted Nationalism, Neoliberalism and the Search for Social Justice* (Scottsville, London, y Harare: University of Natal Press/ Merlin Press/Weaver Press).
- Bratton, Michael 1987 “The Comrades and the Countryside: The Politics of Agricultural Policy in Zimbabwe” en *World Politics*, 39(2), pp 174-202.

- Bratton, Michael 1994 "Micro-Democracy? The Merger of Farmer Unions in Zimbabwe" en *African Studies Review*, 37(1), pp 9-37.
- Cabral, Amilcar 1979 *Unity and Struggle* (New York: Monthly Review Press).
- Chambati, W. y Moyo, Sam 2003 "Land Reform and the Political Economy of Agricultural Labour", (Harare: African Institute for Agrarian Studies) mimeo.
- Chimombe, Theresa 1986 "Foreign Capital" en Mandaza, Ibbo (ed.) *Zimbabwe: The Political Economy of Transition, 1980-1986* (Dakar: CODESRIA).
- Clarke, D.G. 1980 *Foreign Companies and International Investment in Zimbabwe* (London and Gwelo: Catholic Institute for International Relations and Mambo Press).
- Cliffe, Lionel 1988 "Zimbabwe's Agricultural "Success" and Food Security" en *Review of African Political Economy*, 43, pp 4-25.
- Fanon, Frantz 2001 (1961) *The Wretched of the Earth* (Harmondsworth: Penguin Books).
- Gowan, Peter 1998 *The Global Gamble* (London and New York: Verso).
- Government of Zimbabwe, Ministry of Lands and Agriculture (GoZ) 1999) *National Land Policy Framework Paper*, noviembre.
- Haggard, Stephen y Maxfield, Sylvia 1996 "The Political Economy of Financial Liberalization in the Developing World" en Keohane, Robert O. y Milner Helen (eds.) *Internationalization and Domestic Politics* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Hammar, Amanda, Raftopoulos, Brian y Jensen, Stig (eds.) 2003 *Zimbabwe's Unfinished Business: Rethinking Land, State and Nation in the Context of Crisis* (Harare: Weaver Press).
- Kanyenze, Godfrey 1996 *Labour Markets and Employment During ESAP*, mimeo.
- Kanyenze, Godfrey 2004 "Giving Voice to the Unprotected Workers in the Informal Economy in Africa: The Case of Zimbabwe" en *Restart: Our Path to Social Justice - The MDC's Economic Programme for Reconstruction Stabilisation Recovery and Transformation* (Harare: MDC).
- Magaramombe, G. 2003 *Resource Base and Farm Production: Farm Labour Relations, Use and Needs*, African Institute for Agrarian Studies (AIAS), (Harare) mimeo.
- Mamdani, Mahmood 1996 *Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism* (Princeton, NJ: Princeton University Press).

- Mandaza, Ibbo 1986a “The Political Economy of Transition” en Mandaza, Ibbo (ed.) *Zimbabwe: The Political Economy of Transition, 1980–1986* (Dakar: CODESRIA).
- Mandaza, Ibbo 1986b “The State and Politics in a Post-White Settler Colonial Situation” en Mandaza, Ibbo (ed.) *Zimbabwe: The Political Economy of Transition, 1980–1986* (Dakar: CODESRIA).
- Marx, Karl 1975 “Critique of Hegel’s Doctrine of the State” en *Early Writings*, introduced by Lucio Colletti (Harmondsworth: Penguin).
- Matondi, Prosper y Moyo Sam 2003 “Experiences with Market Based Land Reform in Zimbabwe” en Barros, Flávia, Sauer, Sérgio y Schwartzman, Stephen *The Negative Impacts of World Bank Market Based Land Reform* (Brasília: Rede Brasil).
- Ministry of Local Government, Rural and Urban Development 1998 *Discussion Paper on Squatter Policy*, Memorandum, 15 de agosto, Ref: C/54/10, Ministry Archives (Harare).
- Mlambo, A.S. 2000 “Manufacturing in Zimbabwe, 1980–90” en Mlambo, A.S., Pangeti E.S. y Phimister, I. (eds.) *Zimbabwe: A History of Manufacturing, 1890–1995* (Harare: University of Zimbabwe Publications).
- Moyo, Sam 1995 *The Land Question in Zimbabwe* (Harare: SAPES Books).
- Moyo, Sam 1998 *ESAP, Land Policy, and Land Markets*, mimeo.
- Moyo, Sam 1999 *Land and Democracy in Zimbabwe*, Monograph Series (Harare: SAPES Books).
- Moyo, Sam 2000 *Land Reform under Structural Adjustment in Zimbabwe: Land Use Change in the Mashonaland Provinces* (Uppsala: Nordiska Africainstitutet).
- Moyo, Sam 2001a “The Land Occupation Movement and Democratisation in Zimbabwe: Contradictions of Neoliberalism” en *Millennium: Journal of International Studies*, 30(2), pp 311-30.
- Moyo, Sam 2001b *The Interaction of Market and Compulsory Land Acquisition Processes with Social Action in Zimbabwe’s Land Reform*, clase pública, Millennium Lecture Series, London School of Economics, 2 de mayo.
- Moyo, Sam 2003 “The Interaction of Market and Compulsory Land Acquisition Processes with Social Action in Zimbabwe’s Land Reform” en Mandaza, Iboo y Nabudere, Dani (eds.) *Pan-Africanism and Integration in Africa* (Harare: SAPES Books).
- Moyo, Sam (de próxima aparición) *Fast-Track Land and Agrarian Reform in Zimbabwe*.
- Palmer, Robin 1977 *Land and Racial Domination in Rhodesia* (London, Ibadan, Nairobi and Lusaka: Heinemann).

- Phimister, Ian 1988 *An Economic and Social History of Zimbabwe, 1890–1948* (London and New York: Longman).
- Phimister, Ian 2000 “From Preference Towards Protection: Manufacturing in Southern Rhodesia, 1940–1965” en Mlambo, A.S., Pangeti E.S. y Phimister, I. (eds.) *Zimbabwe: A History of Manufacturing, 1890–1995* (Harare: University of Zimbabwe Publications).
- Presidential Land Review Committee Report (PLRC) 2003 *Report of the Presidential Land Review Committee under the Chairmanship of Dr Charles M.B. Utete* Vol. I y II: Main Report to His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe, agosto 2003.
- Raftopoulos, Brian 1992 “Beyond the House of Hunger: Democratic Struggle in Zimbabwe”, I y II en *Review of African Political Economy*: 54, pp 59-74; 55: pp 57-66.
- Raftopoulos, Brian 1996 “Labour Internationalism and Problems of Autonomy and Democratisation in the Trade Union Movement in Southern Rhodesia”, mimeo.
- Raftopoulos, Brian y Yoshikuni, Tsuneo (eds.) 1999 *Sites of Struggle: Essays in Zimbabwe’s Urban History* (Harare: Weaver Press).
- Sachikonye, Lloyd 1986 “State, Capital and Trade Unions” en Mandaza, Ibbo (ed.) *Zimbabwe: The Political Economy of Transition, 1980–1986* (Dakar: CODESRIA).
- Sachikonye, Lloyd 2003 *The Situation of Commercial Farmers after Land Reform in Zimbabwe*, informe preparado para la Farm Community Trust of Zimbabwe.
- Schmidt, Elizabeth 1990 “Negotiated Spaces and Contested Terrain: Men, Women, and the Law in Colonial Zimbabwe, 1890–1939” en *Journal of Southern African Studies*, 16(4), pp 622-48.
- Sibanda, Arnold 1988 “The Political Situation” en Stoneman, Colin (ed.) *Zimbabwe’s Prospects: Issues of Race, Class, State and Capital in Southern Africa* (London: Macmillan).
- Skålnes, Tor 1995 *The Politics of Economic Reform in Zimbabwe* (London: Macmillan).
- Stoneman, Colin 1989 “The World Bank and the IMF in Zimbabwe” en Campbell, Bonnie K. y Loxley, John (eds.) *Structural Adjustment in Africa* (London: Macmillan).
- Stoneman, Colin y Cliffe, Lionel 1989 *Zimbabwe: Politics, Economics and Society* (London and New York: Pinter).
- UNDP, Poverty Reduction Forum (PRF) y IDS 1998, *Zimbabwe Human Development Report 1998* (Harare: UNDP, PRF and IDS).

- UNDP/UNCTAD 2000 *Zimbabwe: Globalization, Liberalization and Sustainable Human Development*, Country Assessment Report, first draft, mimeo.
- Wood, Brian 1988 "Trade-Union Organisation and the Working Class" en Stoneman, Colin (ed.) *Zimbabwe's Prospects: Issues of Race, Class, State and Capital in Southern Africa* (London: Macmillan).
- Van Onselen, Charles 1976 *Chibaro: African Mine Labour in Southern Rhodesia, 1900–1933* (Johannesburg: Ravan Press).
- Yeros, Paris 2002a "Zimbabwe and the Dilemmas of the Left" en *Historical Materialism*, 10(2), pp 3-15.
- Yeros, Paris 2002b "The Political Economy of Civilisation: Peasant-workers in Zimbabwe and the Neo-colonial World", tesis de doctorado , University of London.
- ZCTU 1996 *Beyond ESAP: Framework for a Long-term Development Strategy in Zimbabwe Beyond the Economic Structural Adjustment Programme* (Harare: ZCTU).